

**UNIVERSIDAD DE HUANUCO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**  
**PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



**TESIS**

---

**“INCIDENCIA DEL CONCESORIO DEL RECURSO DE APELACION  
EN EL PROCESO UNICO DE EJECUCION Y EL DERECHO A LA  
TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DEL EJECUTADO EN EL  
SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE HUANUCO, 2018”**

---

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA**

**AUTORA: Fonseca Salazar, Nelcy Lizha**

**ASESORA: Espinoza Cañoli, Ena Armida**

**HUÁNUCO – PERÚ**

**2020**

U

D

H



**UDH**  
UNIVERSIDAD DE HUANUCO  
<http://www.udh.edu.pe>

**TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:**

- Tesis ( X )
- Trabajo de Suficiencia Profesional( )
- Trabajo de Investigación ( )
- Trabajo Académico ( )

**LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:** Desarrollo de estudios en derechos sustantivos y procesales en constitucional, civil, penal, laboral, tributario, administrativo y empresarial

**AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN** (2018-2019)

**CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:**

**Área:** Ciencias Sociales

**Sub área:** Derecho

**Disciplina:** Derecho

**DATOS DEL PROGRAMA:**

Nombre del Grado/Título a recibir: Título

Profesional de Abogada

Código del Programa: P01

Tipo de Financiamiento:

- Propio ( X )
- UDH ( )
- Fondos Concursables ( )

**DATOS DEL AUTOR:**

Documento Nacional de Identidad (DNI): 22502420

**DATOS DEL ASESOR:**

Documento Nacional de Identidad (DNI): 22425372

Grado/Título: Maestro en derecho, con mención en ciencias penales

Código ORCID: 0000-0002-5243-1182

**DATOS DE LOS JURADOS:**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	Montaldo Yerena, Ruth Mariksa	Magíster en gestión pública	42093012	0000-0002-5081-6310
2	Vidal Romero, Hugo Ovidio	Abogado	22474986	0000-0001-6103-6777
3	Berrospi Noria, Marianela	Abogado	22521052	0000-0003-2185-5529

## ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las 18:15 horas del día 16 del mes de Diciembre del año 2020, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunieron el Sustentante y el Jurado calificador mediante plataforma virtual Google meet integrado por los docentes:

**Mtra. Ruth Mariksa MONTALDO YERENA**  
**Abog. Hugo Ovidio VIDAL ROMERO**  
**Abog. Marianela BERROSPI NORIA**


**: Presidente**  
**: Secretario**  
**: Vocal**

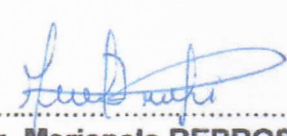
Nombrados mediante la Resolución N° 901-2020-DFD-UDH de fecha 11 de diciembre de 2020, para evaluar la Tesis intitulada "INCIDENCIA DEL CONCESORIO DEL RECURSO DE APELACION EN EL PROCESO UNICO DE EJECUCION Y EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DEL EJECUTADO EN EL SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE HUANUCO, 2018", presentado por la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, **FONSECA SALAZAR, Nelcy Lizha**, para optar el Título profesional de Abogado.

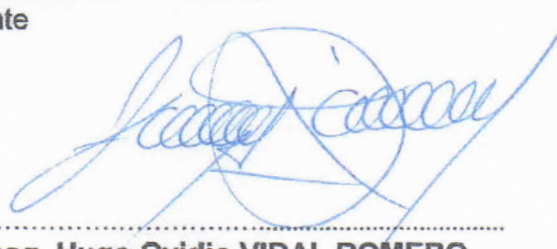
Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: Exposición y Absolución de preguntas; procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del jurado

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) **APROBADA** por **UNANIMIDAD** con el calificativo cuantitativo de **DIECISÉIS** y cualitativo de **BUENO**.

Siendo las 19:04 horas del día 16 del mes de Diciembre del año 2020 los miembros del jurado calificador Ratificados firman la presente Acta en señal de conformidad.

  
.....  
**Mtra. Ruth Mariksa MONTALDO YERENA**  
Presidente

  
.....  
**Abog. Marianela BERROSPI NORIA**  
Vocal

  
.....  
**Abog. Hugo Ovidio VIDAL ROMERO**  
Secretario

# UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

**RESOLUCIÓN N° 901-2020-DFD-UDH**

Huánuco, 11 de diciembre de 2020

Visto, el ID 277090-0000003467 de fecha 30 de noviembre de 2020 presentado por la Bachiller **FONSECA SALAZAR, Nelcy Lizha** quien pide se Ratifique y se designe a los miembros del Jurado y se señale fecha y hora para sustentar el Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado intitulado intitulado "INCIDENCIA DEL CONCESORIO DEL RECURSO DE APELACION EN EL PROCESO UNICO DE EJECUCION Y EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DEL EJECUTADO EN EL SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE HUANUCO, 2018" para optar el Título profesional de Abogado

## CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 790-2020-DFD-UDH de fecha 23 de noviembre de 2020 se Aprueba el informe final de Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado intitulado intitulado "INCIDENCIA DEL CONCESORIO DEL RECURSO DE APELACION EN EL PROCESO UNICO DE EJECUCION Y EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DEL EJECUTADO EN EL SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE HUANUCO, 2018" del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas de la UDH, quien anteriormente fue declarado **APTO** para sustentar dicha investigación;

Que, estando a lo dispuesto en el Art. 41 del Reglamento General de Grados y Títulos a lo Establecido en el Art. 44 de la Nueva Ley Universitaria N° 32220; Inc. n) del Art 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; y la facultad contemplada en la Resolución N° 795-2018-R-CU-UDH de fecha 13 de julio de 2018;

## SE RESUELVE:

**Artículo Primero. – RATIFICAR Y DESIGNAR** a los miembros del Jurado de Tesis para examinar a la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la UDH, **FONSECA SALAZAR, Nelcy Lizha** para optar el Título Profesional de Abogado por la modalidad de Sustentación del Trabajo de Investigación Científica (Tesis), a los siguientes docentes:

**Mtra. Ruth Mariksa MONTALDO YERENA**

: **Presidente**

**Abog. Hugo Ovidio VIDAL ROMERO**

: **Secretario**

**Abog. Marianela BERROSPI NORIA**

: **Vocal**

**Artículo Segundo. – SEÑALAR** el día *miércoles 16 de diciembre del año 2020 a horas 6:00 p.m.* dicha sustentación pública de manera virtual.

Regístrese, comuníquese y archívese



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  
*[Firma]*  
Dr. FERNANDO CORCONO BARRUETA  
DECANO

**DISTRIBUCIÓN:** Of. Mat. Y Reg. Acad., Exp. Graduando, Interesada, Jurados (4) Asesor. Archivo, FCB/ytch

Resolución N° 033-2016 SUNEDU/CD-4.12.-Reglamento del Registro Nacional de Trabajo de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales, RENATI

## **DEDICATORIA**

A mis queridos padres y hermanos  
por el apoyo incondicional que me  
brindaron durante mi formación  
profesional.

## **AGRADECIMIENTO**

A la Universidad de Huánuco, mi alma mater, a mis docentes por impartir sus conocimientos y contribuir en mi formación profesional.

## ÍNDICE

DEDICATORIA .....	II
AGRADECIMIENTO .....	III
ÍNDICE .....	IV
ÍNDICE DE CUADROS .....	VII
ÍNDICE DE GRÁFICOS .....	VIII
RESUMEN .....	IX
SUMMARY .....	X
INTRODUCCIÓN .....	XI
CAPÍTULO I .....	12
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .....	12
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .....	12
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	13
1.2.1. PROBLEMA GENERAL .....	13
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS .....	13
1.3. OBJETIVO GENERAL .....	14
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....	14
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .....	14
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN .....	15
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN .....	15
CAPÍTULO II .....	17
MARCO TEÓRICO .....	17
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .....	17
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES .....	17
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES .....	18
2.2. BASES TEÓRICAS .....	20

El mandato ejecutivo.....	53
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES.....	66
2.4. HIPÓTESIS.....	67
2.4.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.....	67
2.5. VARIABLES.....	68
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.....	68
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE .....	68
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	69
CAPÍTULO III.....	70
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	70
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .....	70
3.1.1. ENFOQUE.....	70
3.1.2. ALCANCE O NIVEL .....	70
3.1.3. DISEÑO .....	70
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA .....	71
3.2.1. POBLACIÓN .....	71
3.2.2. MUESTRA.....	71
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	71
3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN .....	71
CAPÍTULO IV.....	72
RESULTADOS.....	72
4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS .....	72
4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS..	80
CAPÍTULO VI.....	81
DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	81
5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.....	81



CONCLUSIONES .....	82
RECOMENDACIONES .....	83
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	84
ANEXOS .....	86

## ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1 .....	73
Cuadro N° 2 .....	74
Cuadro N° 3 .....	75
Cuadro N° 4 .....	78

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1 .....	76
Gráfico N° 2 .....	78

## **RESUMEN**

El Informe del trabajo de investigación en su versión culminada, refiere sobre la incidencia del concesorio del recurso de apelación en el proceso único de ejecución y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el segundo juzgado civil de Huánuco, 2018, su contenido está dividida en cinco capítulos: El primer capítulo se relaciona con la descripción del problema en la que el ejecutado interpone recurso impugnatorio de apelación contra el auto que resuelve la contradicción y pone fin al proceso único de ejecución, la misma que es concedida sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 691 de la norma legal antes acotada. El segundo capítulo se trata sobre los antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional y local, relacionado con la investigación y sus bases teóricas se desarrolló en atención a su variable independiente el concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución, y su variable dependiente la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado. El tercer capítulo versa sobre la metodología de la investigación empleada de tipo aplicada, y tiene como base la descripción en el tiempo sobre los expedientes que se sustanciaron en el Segundo Juzgado Civil del Distrito Judicial de Huánuco, 2018, su muestra está constituida por 06 expedientes del Proceso Único de Ejecución, con las características señaladas. El capítulo cuarto contiene básicamente los resultados de la investigación, constituida por el procesamiento de datos, contrastación y prueba de hipótesis, y para terminar en el capítulo quinto la Discusión de Resultados, las conclusiones y recomendaciones.

## **SUMMARY**

The report of the investigation work in its completed version, refers to the incidence of the concession of the appeal in the single process of execution and the right to effective jurisdictional protection of the executed in the second civil court of Huánuco, 2018, its content is divided in five chapters: The first chapter is related to the description of the problem in which the executed person lodges an impugnmental appeal against the order that resolves the contradiction and puts an end to the single execution process, which is granted without suspensive effect and without the quality of deferred, contravening the provisions of article 691 of the legal norm defined above. The second chapter deals with the background of the investigation at international, national and local level, related to the investigation and its theoretical bases, the concession of the appeal in the Single Execution Process was developed in attention to its independent variable, and its dependent variable the effective jurisdictional guardianship of the executed. The third chapter deals with the methodology of the applied type applied research, and is based on the description in time about the files that were substantiated in the Second Civil Court of the Judicial District of Huánuco, 2018, its sample consists of 06 files of the Single Execution Process, with the characteristics indicated. The fourth chapter basically contains the results of the investigation, constituted by data processing, contrast and hypothesis testing, and to end in the fifth chapter the Discussion of Results, conclusions and recommendations.

## INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación concluida mediante el informe final, consiste en la incidencia del concesorio del recurso de apelación en el proceso único de ejecución y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el segundo juzgado civil de Huánuco, 2018, se encuentra delimitada bajo los siguientes aspectos, a saber: La descripción del problema implica en establecer en el caso en el que el ejecutado interpone recurso impugnatorio de apelación contra el auto que resuelve la contradicción y pone fin al proceso único de ejecución, la misma que es concedida sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, contraviene lo dispuesto en el artículo 691 de la norma legal antes acotada. En cuanto a la formulación de problema, se ha tenido por conveniente plantear lo siguiente: ¿Cómo incidirá el concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018? Asimismo se justifica la investigación porque nos ha permitido describir y explicar jurídicamente el problema existente que se presenta en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, en el Proceso Único de Ejecución, el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado, es concedida sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida. Los objetivos se orientó a explicar la manera de demostrar el grado de incidencia del concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado, empleándose para tal efecto el método y técnica aplicada, y como base la descripción en el tiempo sobre los expedientes que se tramitaron, las fuentes de información se recabó de las bibliotecas de la ciudad con limitaciones.

## **CAPÍTULO I**

### **PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

#### **1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

Los asuntos contenciosos contenidos en el artículo 688 del Código Procesal Civil se tramitan dentro de los alcances del Proceso Único de Ejecución, a la demanda se debe acompañar el título de ejecutivo además de los requisitos y anexos previstos en los artículos 424 y 425 y los que especifiquen en las disposiciones especiales.

Es competente para conocer los procesos con título ejecutivo de naturaleza extrajudicial el Juez Civil y el de Paz Letrado. El Juez de Paz Letrado es competente cuando la cuantía de la pretensión no sea mayor de cien Unidades de Referencia Procesal. Las pretensiones que superen dicho monto son de competencia Del Juez Civil.

La resolución que admite a trámite la demanda contendrá mandato ejecutivo, disponiendo el cumplimiento de la obligación contenida en el título, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada, en caso no cumpla con pagar en el plazo de cinco días de notificado. Dentro del plazo antes señalado el ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o defensas previas, en el mismo escrito se presentaran los medios probatorios pertinentes, de lo contrario el pedido será declarado inadmisibile. La contradicción sólo, podrá fundarse por las causales contenidas en el artículo 690-D del Código Procesal Civil.

El artículo 691 del Código Procesal Civil, señala que el plazo para interponer apelación contra el auto, que resuelve la contracción es de tres días contados desde el día siguiente a su notificación. El auto que resuelve la contradicción, poniendo fin al proceso único de ejecución es apelable con efecto suspensivo. Si la apelación es concedida sin efecto suspensivo, tendrá la calidad de diferida.

En el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, en el periodo 2018, en el Proceso Único de Ejecución, admitida la demanda y formulada contradicción por el ejecutado, y tramitado del proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 690-E del Código Procesal Civil, expedido el auto ordenando llevar adelante la ejecución, el ejecutado interpone recurso impugnatorio de apelación contra el auto que resuelve la contradicción y pone fin al proceso único de ejecución, la misma que es concedida sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 691 de la norma legal antes acotada.

Con la presente investigación daremos solución a este problema, a fin de no afectar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado, encontrando mecanismos de solución rápida y oportuna, proponiendo una regulación integral del artículo 691 del Código Procesal Civil, a fin cautelar los derechos de los ejecutados, ya que conceder la apelación con ese efecto contrae que el proceso principal no se suspenda es decir se continúe con la ejecución forzada.

## **1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

### **1.2.1. PROBLEMA GENERAL**

¿Cómo incidirá el concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018?

### **1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS**

**PE1** ¿Cuál es el nivel de incidencia logrado, del concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018?

**PE2** ¿Qué tan frecuentes han sido la aplicación del concesorio del recurso de apelación con efecto suspensivo en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018?



### **1.3. OBJETIVO GENERAL**

Demostrar el grado de incidencia del concesorio del recurso de apelación sin efecto suspensivo en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018.

### **1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

**OE1** Determinar el nivel de incidencia del concesorio del recurso de apelación con efecto suspensivo en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018.

**OE2** Identificar el nivel de frecuencia del concesorio del recurso de apelación sin efecto suspensivo en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018.

### **1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

- Desde el punto de vista teórico, nos ha permitido desarrollar y detallar el problema que se presenta en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, en el Proceso Único de Ejecución, que admitida la demanda y formulada contradicción por el ejecutado, y tramitado del proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 690-E del Código Procesal Civil, expedido el auto ordenando llevar adelante la ejecución, el ejecutado interpone recurso impugnatorio de apelación contra el auto que resuelve la contradicción y pone fin al proceso único de ejecución, la misma que es concedida sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 691 de la norma legal antes acotada.
- En lo práctico es necesario señalar que se justifica la investigación porque ha sido trascendente en el sentido de hacer conocer a los letrados, auxiliares jurisdiccionales y estudiantes de la facultad de derecho, que en el Órgano Jurisdiccional antes citado, se estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 691 de la norma adjetiva civil, al conceder el recurso impugnatorio de apelación contra el auto que pone fin al proceso

con un efecto distinto a los que dispone la norma en referencia es decir sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida. De esa forma y no solo se justifica el presente trabajo, sino básicamente por haberse identificado la problemática en cuanto a su relación con la posible vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado.

- En lo metodológico, es importante ya que al analizar la población y muestra de la investigación, la cual está basada en los expedientes sobre Proceso Único de Ejecución, en las que se han concedido recurso de apelación con efecto distinto a lo previsto en el artículo 691 en el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, también se justifica en el sentido de que existen un número considerable de procesos con las características antes mencionadas, siendo así, se tiene que se ha corroborado dicha información con las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, así como con las técnicas para el procesamiento y análisis de la información.

#### **1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN**

Las limitaciones advertidas en el presente trabajo, consistieron en lo siguiente:

- En este contexto se advirtió cierta limitación en las bibliotecas de la Universidad de Huánuco y Universidad Nacional Hermilio Valdizán, al no contar con material bibliográfico sobre el tema, encontrando solo lo básico, por lo que se optó con recurrir a bibliotecas de abogados de ejercicio libre de la profesión.
- Asimismo otra de las limitaciones es la falta de investigaciones desarrolladas con relación a la investigación, en su forma directa, por lo novedoso que resulta ser el problema investigado, no obstante ello se encontraron investigaciones sobre el particular pero en forma indirecta.

#### **1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN**

El presente proyecto de investigación ha sido viable porque se ha tenido acceso a la información sobre el tema, tanto documentos bibliográficos, hemerográficos, así como a los expedientes sobre Proceso Único de Ejecución, obrantes en el Segundo Juzgado Civil del Distrito Judicial de

Huánuco, 2018 en la que se ha concedido recurso impugnatorio de apelación con efecto distinto a lo preceptuado por el artículo 691 del Código Procesal Civil. Asimismo, se ha contado con asesores expertos en materia de tutela ejecutiva y metodológica para la realización del trabajo.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

##### **2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES**

A nivel internacional, existen estudios relacionados a la incidencia del inicio de la ejecución forzada en los procesos de obligación de dar suma de dinero.

**Título:** *“EL EMBARGO DE LOS DERECHOS Y ACCIONES EN EL JUICIO EJECUTIVO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN EL REMATE Y ENTREGA DEL BIEN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”*. **Autor:** Lorena del Rocío VELASCO VÁSQUEZ. **Año:** 2015. **Universidad:** UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES” DE ECUADOR.

#### **Conclusiones**

**1.-**Que, la legislación civil vigente no establece un mecanismo jurídico válido y efectivo para ejecutar la entrega material de una cuota singular o universal de un bien rematado; por lo tanto, se torna indispensable que la Asamblea Nacional revise las normas procesales vigentes con relación al embargo, remate, adjudicación y entrega material de una cuota conyugal o de participación y dote de seguridad jurídica.

**2.-**Que, el Código Orgánico General de Procesos que entrará en vigencia en mayo del 2015, tampoco establece un mecanismo efectivo para la entrega material de una cuota singular o universal de un bien rematado, debiendo la Asamblea Nacional adecuar la normativa legal a los mandatos constitucionales, y garantizar la tutela efectiva, rápida y oportuna de los derechos de los adjudicatarios sin que en ningún caso queden en indefensión.

**3.-**Que, en el ejercicio del derecho existen inconvenientes para realizar la entrega material de una cuota o de derechos y acciones del bien rematado en juicio ejecutivo y que es necesario que se establezca normativa previa, clara y pública a ser aplicada por la autoridad competente para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva del rematista, sin que el trámite sea largo

o engorroso y se lleve a cabo dentro del mismo proceso de ejecución; sin necesidad de entablar un juicio de partición para la entrega material de la cosa rematada.

**4.-**Que, en el ensayo jurídico, se evidencia la vulneración realizada al principio de tutela efectiva por parte de los operadores de justicia en la fase de ejecución de sentencia, sobre el embargo, remate y entrega material de una cuota conyugal o de convivencia en el bien adjudicado en juicio ejecutivo o en la fase de ejecución según los artículos 453 y 477 del Código de Procedimiento Civil vigente y los artículos 380 y 411 del Código Orgánico General de Procesos; normativa legal que resulta insuficiente para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador. (VELASCO VÁSQUEZ L. 2015).

### **Comentario**

Con la relación a la tesis señalada precedentemente se tiene que el autor de la investigación precisa que en la legislación ecuatoriana, no existe un mecanismo efectivo para la entrega material de una cuota singular o universal de un bien rematado y que es necesario que se establezca una normativa previa y que se lleve a cabo en el mismo proceso de ejecución, siendo así la normativa resulta insuficiente para garantizar el derecho a la tutela judicial. En nuestra legislación una vez adjudicado el bien inmueble al mejor postor en remate público, el mecanismo existente para la entrega del dinero, está dado a quien tenga mejor derecho, y que se hace valer a través de una acción de tercería preferente de pago, caso contrario el acreedor en la cual se ha rematado el bien, podría cobrar dicha acreencia, sin contar con mejor derecho.

### **2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES**

Se ha encontrado, respecto de la investigación, antecedentes indirectos como es el caso de:

**Título:** *“EL DEBIDO PROCESO DE EJECUCION DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO: EN BUSCA DE UN PROCESO JUSTO”* **Autor:** Sergio Natalino CASASSA CASANOVA. **Año:** 2011. **Universidad:** PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ.

## **Conclusiones:**

**1.-** La acción ejecutiva, como presupuesto del proceso de ejecución, nace de la existencia de un título ejecutivo. Ante ello, y como quiera que tenemos – en nuestro ordenamiento - un gran número de títulos de naturaleza extra judicial, de los cuales se habría – implícitamente- renunciado a verificar la legalidad del acto jurídico que lo subyace (a diferencia de los títulos de naturaleza judicial), obliga tener mecanismos de control eficaces que permitan – sin desnaturalizar la naturaleza ejecutiva del proceso de ejecución – evitar procesos injustos, en tanto que se podría dar inicio a ejecuciones en mérito a documentos con eficacia ejecutiva pero con una obligación inexistente o ilícita.

**2.-** Nuestro proceso de ejecución de obligación de dar suma de dinero, tiene un modelo hispánico medioeval, y consecuentemente ha insertado a su interior a la oposición, o contradicción como ahora le conocemos, el mismo que puede ser invocado por el ejecutado sólo en supuestos específicos, orientados a desconstituir los efectos ejecutivos que el título posee.

**3.-** Atendiendo a la naturaleza jurisdiccional del proceso de ejecución, éste proceso goza del principio del contradictorio, aunque el mismo aparece en forma diferida. La contradicción es un incidente – de naturaleza constitutiva procesal – de cognición sumaria, atendiendo a la restricción de alegaciones, pruebas e inclusive en materia recursiva.

**4.-** En principio, el fundamento de la cosa juzgada está precisamente en la seguridad jurídica, la cual debe ser vista no sólo por la seguridad que ésta brinda, sino también por la seguridad en la construcción de la resolución que la contiene. La cosa juzgada es un atributo para aquellas resoluciones que se pronuncien sobre el fondo de la controversia. Atendiendo a todo esto, cuando en el proceso de ejecución, no se formula “contradicción”, la orden de seguir adelante con la ejecución, importa el desarrollo de la actividad ejecutiva del proceso, en consecuencia, dicha resolución es una resolución netamente procesal, por ende no constituye cosa juzgada. Por otro lado, cuando se formula “contradicción” y se activa el incidente de cognición sumaria, pese a todas las limitaciones que éste incidente importa, véase que en él, se puede ventilar temas de una potencial litigiosidad, las cuales no necesariamente son

coherente con la naturaleza del proceso de ejecución, lo cual hace que lo resuelto en él no debe generar cosa juzgada.

**5.-** Ninguno de los remedios extraordinarios – sea la nulidad de cosa juzgada fraudulenta o el proceso de amparo - ayudan a evitar o revertir los efectos de un proceso de ejecución que contenga – eventualmente – una resolución injusta. Como recomendación, proponemos – respetando la naturaleza ejecutiva del proceso de ejecución – incorporar el proceso plenario posterior, para que en aquellos casos debatidos e inclusive los no debatidos en el incidente de cognición sumaria, puedan ser vueltos a debatir sin restricciones, haciendo que la desventaja, de la parte agraviada – tanto ejecutante como ejecutado - pueda compensarse en uno posterior, haciendo así a la ejecución una herramienta acorde a un justo proceso. (CASASSA CASANOVAS. 2011).

### **Comentario**

Con relación a esta investigación el autor hace referencia sobre los títulos ejecutivos que se pueden hacer valer en la vía del proceso ejecutivo hoy proceso único de ejecución, asimismo concluye que la cosa juzgada es un atributo que le da seguridad jurídica, sin embargo erróneamente sostiene que si el ejecutado formula contradicción al mandato de ejecución dicha resolución no adquiere la calidad de cosa juzgada.

## **2.2. BASES TEÓRICAS**

**A. De la variable independiente.**El concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución.

### **Medios Impugnatorios**

El Artículo 355 del Código procesal Civil, señala que los medios impugnatorios las partes o terceros legitimados solicitan que se anule o revoque, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error.

## Introducción

Conforme señala HINOSTROZA, la impugnación se sustenta en la necesidad de disminuir la posibilidad de injusticia basada, principalmente, en el error judicial, el mismo que si no es denunciado, origina una situación irregular e ilegal, que causa agravio al interesado. Precisa que, la revisión de los actos que se encuentran afectados de vicio o error aparece a consecuencia de un perjuicio inferido al impugnante surgido como consecuencia de la inobservancia de las reglas procesales o de una errónea apreciación al resolver así como en el caso que exista una decisión arbitraria o una conducta dolosa. En tal sentido y con la finalidad de garantizar una resolución justa y la estricta aplicación de la ley resulta indiscutiblemente necesaria la impugnación de los actos procesales y la instancia plural.

Lo que se buscaría a través de esta institución sería la perfección de las decisiones judiciales en atención que ante la advertencia de un error o vicio puesta en conocimiento por alguna de las partes en el proceso, sea el órgano de segundo grado o superior que logre corregir la resolución del A quo y por ende lograr que los actos del Juez sean decisiones válidas. En tal sentido el fundamento de la impugnación se sustenta en el hecho de que este constituye un acto humano y por tanto factible de error, por ello se otorga la posibilidad a los justiciables de utilizar determinado mecanismo a fin de que puedan ser revisadas tales decisiones y en caso de que se encuentre un error, o vicio se declare su nulidad o revocación, buscando de esta manera que las decisiones del órgano jurisdiccional sean lo más justas posibles.

En tal sentido el profesor PRIORI ha cuestionado tal fundamento de la impugnación indicando que: *“El problema que enfrenta el instituto de la impugnación (y del cual no puede salir) es quien revisa la resolución es un ser humano y, como tal, es también falible. Si el error es entonces el gran fundamento de la impugnación habría también que permitir que la decisión de quien revisa sea revisada, pues ella es también susceptible de error. El gran problema es que quien va a revisar siempre va a ser un ser humano y su juicio va a ser siempre pasible de error, con lo cual si admitimos que las decisiones jurisdiccionales sean siempre revisadas porque siempre existe la posibilidad*



*de error, jamás tendremos una decisión jurisdiccional definitiva; es decir, una decisión judicial jamás podrá obtener la calidad de cosa juzgada, impidiendo con ello que la función jurisdiccional pueda cumplir su cometido, con la terrible consecuencia de no poder lograr la paz social en justicia.”* Resulta válido el planteamiento si este fuera el único fundamento en materia impugnatoria y por tanto no habría certeza jurídica de las decisiones judiciales, pero felizmente ello no es así, y aun cuando cuestionable en nuestro sistema, constituye una “garantía” para los justiciables la existencia de un órgano superior que pueda revisar lo resuelto por el a quo con la finalidad de corregir el error o vicio en el que pueda haber cometido el cual fuera advertido por una de las partes o terceros legitimados en el proceso.

Más, se debe tener en cuenta que cuando nos referimos al tema de los medios impugnatorios y lo relacionamos con el debido proceso inmediatamente sale a luz lo regulado por nuestra norma constitucional, la cual en su artículo 139° inciso 6 reconoce el derecho a la pluralidad de instancia, el mismo que según el Tribunal Constitucional, constituye “una garantía consustancial del derecho al debido proceso, mediante el cual se persigue que lo resuelto por un juez de primera instancia pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior, y de esa manera se permita que lo resuelto por aquél, cuando menos, sea objeto de un doble *pronunciamiento jurisdiccional*.” En tal sentido la profesora ARIANO, señala que: “Y como el paso de una ‘instancia’ (la primera) a otra (la segunda) no es por ‘generación espontánea’, sino por un acto de parte, y en concreto a través de lo que solemos llamar un ‘medio de impugnación’, resulta inevitable que por derecho a la ‘pluralidad de la instancia’ se termine entendiendo como el derecho a los recursos (o más general, a las impugnaciones) que tal ‘pluralidad’ promueven.”

En tal sentido al constituir también una garantía constitucional, esta no puede quedar limitada por ejemplo en el supuesto que el letrado no se encuentre al día en sus cotizaciones ante el Colegio al que pertenece, ya que dicha situación no debe perjudicar a las partes en el proceso, al respecto, reiteradas ejecutorias se ha señalado que: “(...) Si el Abogado que autorizó el recurso de apelación no estuvo habilitado para el patrocinio judicial por falta

de cuotas gremiales, ello no es razón suficiente para anular el acto procesal y los efectos que de él hayan derivado (...) resulta de mayor interés considerar que la parte procesal o patrocinado (sea actor o demandado) no se veas perjudicada en su derecho a la doble instancia por la irregularidad administrativa anotada, pues, el objeto o fin del medio impugnatorio referido es que el juez (Colegiado) superior revise el fallo apelado, pues pese a que el recurso es defectuoso al estar autorizado por el letrado inhabilitado, ha cumplido con satisfacer la vigencia o tutela del derecho a impugnar las resoluciones judiciales consagrado en la Constitución Política del Estado como principio del debido proceso (...)"

Finalmente, podemos señalar que es fundamental en el procedimiento que todo acto del Juez que pueda ocasionar alguna lesión los intereses o derechos de una de los litigantes, o que sirva para impulsar el proceso y conducirlo a sus distintas etapas preclusivas, sea impugnable; es decir, que exista algún mecanismo para atacarlo, con el objeto que se enmienden los errores o vicios en que se haya incurrido.

No podría concebirse un sistema judicial en la que los actos del órgano jurisdiccional no sean objeto de impugnación. En tal sentido existe gran variedad de medios impugnatorios que la norma procesal concede a las partes, según la naturaleza del acto procesal.

Más, tal posibilidad no puede hacerse uso indiscriminadamente, sino en los términos y condiciones que la norma procesal señala; y no es indiferente que se use de ellos, en cada caso concreto, pero cualquiera de las partes, sino, por el contrario, es que ella en cuyo favor los consagra la norma quien debe y puede ejercitarlos. De tal manera, corresponde únicamente a la parte perjudicada con la decisión judicial la posibilidad de interponer reposición, apelación o casación contra ella. Ante la existencia de un defecto o vicio procesal.

## **Definición**

Según MONROY GALVEZ , *"Podemos definir este instituto procesal como el instrumento que la ley le concede a las partes o a terceros legitimados*

*para que soliciten al juez que, el mismo u otro de jerarquía superior, realicen un nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso, a fin de que se anule revoque éste, total o parcialmente.”*

En tal sentido esta figura procesal constituye una facultad que otorga la norma procesal a las partes y quienes tengan un legítimo interés en el proceso con el objeto de que la decisión expedida por el magistrado sea revisada por su superior por cuanto se le ha puesto de conocimiento la existencia de un vicio o error y para que este en su caso lo revoque sea en parte o en su totalidad y logre de esta manera la finalidad del proceso.

Para GOZAINI, *“el reconocimiento del derecho a impugnar la decisión, se viabiliza en la senda de los recursos, que son medios de transferir la queja expresiva de los agravios, que son considerados presentes en la resolución cuestionada.”*

También se puede señalar que constituyen aquellos actos jurídico procesales realizados por las partes legitimadas en el proceso con la intención de poner en conocimiento del Juez los vicios (causal de nulidad que la invalida) o errores (aplicación equivocada de la norma o una apreciación equivocada de los hechos) que afectan a uno o más actos procesales para que este o el superior disponga su revocación o anulación sea esta de manera total o parcial, restándole de esta manera sus efectos. Por ello DEVIS Echandia sostiene que: *“La revocabilidad es un remedio jurídico contra la injusticia de la resolución del juez, al paso que la nulidad lo es en contra de su invalidez. La impugnación es el género, el recurso es la especie. La revocación procede no sólo cuando el juez aplica indebidamente la ley o deja de aplicarla, sino también cuando se dejan de cumplir formalidades procesales, si se recurre en tiempo oportuno; después sólo puede pedirse la nulidad. La impugnación debe hacerse oportunamente, hasta cierto momento, llegado el cual la decisión adquiere firmeza, pues de lo contrario sería imposible concluir un proceso y se perdería la certeza jurídica.”*

Debemos precisar que tanto la nulidad como la apelación deben ser interpuestos de manera oportuna puesto que sino la consecuencia será

contraria si solamente se tiene plazo para impugnar y no para solicitar la nulidad, más aún si como vamos a ver más adelante, el recurso de apelación lleva intrínsecamente el de nulidad, por ello la imposibilidad de plantear doble recurso respecto de una misma resolución.

GOZAINI señala como objeto de la impugnación que ésta: “...*tiende a corregir la falibilidad del juzgador, y, con ello, a lograr la eficacia del acto jurisdiccional.*” En doctrina se señala que el presupuesto sobre el que se sustenta la impugnación es el error, puesto que juzgar constituye un acto humano y como tal pasible de éste; si bien es la parte impugnante la que busca la aplicación del derecho, que constituye el objeto del proceso, desde su punto de vista advierte la existencia de esta situación en la resolución del Juez, por lo que la invoca. Le corresponde al Estado la revisión de los actos no consentidos por las partes en los que se ha advertido lo señalado (el error) por una de ellas, buscado así la perfección y por ende la convalidación o no de los actos resuelto por el Juez, ello a través del mismo órgano encargado para la administración del justicia, pero de una instancia superior la misma que deberá eliminar o reducir el riesgo de error, buscado que la decisión sea lo más justa posible.

A las partes intervinientes en el proceso les corresponde la posibilidad de señalar los errores in procedendo o in iudicando que pudiera haberse incurrido en el proceso, sea a través de un acto procesal contenido o no en una resolución, y lograr de esta manera la adecuación del proceso dentro de los causes de legalidad y regularidad, pero esta posibilidad al igual que cualquier derecho que tiene las partes debe contar con una limitación, pues el hecho de existir la posibilidad ilimitada de impugnar podría generar no solo perjuicios económicos para las partes sino también una inestabilidad jurídica que afecta el contexto social y político del estado de derecho.

Para la doctora ARIANO : “...*todas las impugnaciones (pero en particular la apelación), en tanto permiten llevar a conocimiento de un segundo juez lo resuelto por el primero, son una suerte de ‘garantía de garantías’, en buena cuenta una garantía del debido proceso mismo, porque son el más efectivo vehículo para, por un lado, evitar el ejercicio arbitrario del poder por*

*parte del juez A quo y, por otro, para permitir corregir (lo antes posible) los errores del mismo.”*

Los medios impugnatorios constituyen todos aquellos instrumentos de los que se valen las partes con la finalidad de que puedan cuestionar la validez de un acto procesal, que presuntamente contiene un vicio o error que lo afecta, el mismo que debe ser corregido por el propio órgano que lo emite o por su superior.

En anterior oportunidad ya nos habíamos referido a los medios impugnatorios cuando precisábamos que: “Son los actos procesales que se caracterizan por ser formales y motivados. Representan manifestaciones de voluntad realizadas por las partes (aún por terceros legitimados) dirigidas a denunciar situaciones irregulares o vicios o errores que afecta a uno o más actos procesales, y a solicitar que el órgano jurisdiccional revisor proceda a su revocación o anulación, eliminándose de esta manera los agravios inferidos al impugnante derivados de los actos del proceso cuestionados por él.”

Los medios impugnatorios comprenden a los remedios y los recursos. Los remedios atacan a actos jurídicos procesales no contenidos en resoluciones; v. gr., ante una deficiencia del emplazamiento de la demanda porque no se ha recaudado todas las copias, el demandado puede devolver la cédula, advirtiendo esta deficiencia, a fin que sea notificado debidamente.

Los recursos, en cambio, atacan exclusivamente a las resoluciones. El procesalista argentino Palacio puntualiza que la razón de ser de los recursos reside en la falibilidad del juicio humano, y en la consiguiente conveniencia de que, por vía de reexamen, las decisiones judiciales se adecuen, en la mayor medida posible, a las exigencias de la justicia, lo que no implica propiciar el escalonamiento indefinido de instancias y recursos, que conspira contra la mínima exigencia de celeridad que todo proceso judicial requiere.

En sede casatoria se ha señalado que: *“El instituto procesal de los medios impugnatorios puede definirse como el instrumento que la ley concede a las partes o terceros legitimados para que soliciten al juez que el mismo u*

*otro de jerarquía superior realicen un nuevo examen del acto procesal o de todo el proceso, a fin de que se anule o revoque este, total o parcialmente”*

Al respecto nuestro supremo tribunal se ha referido a este tema, señalando que: “(...)Uno de los derechos que conforman el derecho al debido proceso es el derecho de acceso a los medios impugnatorios. En ese sentido, es necesario precisar que en la medida en que el derecho al debido proceso no tiene un ámbito constitucionalmente garantizado en forma autónoma, sino que su lesión se produce a consecuencia de la afectación de cualesquiera de los derechos que lo comprenden, dentro del cual se encuentra el de acceso a los medios impugnatorios, un pronunciamiento sobre el fondo en relación con aquel derecho presupone, a su vez, uno en torno al último de los mencionados.

El derecho a los recursos o medios impugnatorios es un contenido implícito de un derecho expreso. En efecto, si bien este no se encuentra expresamente reconocido en la Constitución Política del Perú, su reconocimiento a título de derecho fundamental puede inferirse de la cláusula constitucional mediante la cual se reconoce el derecho al debido proceso. Como se expresa en el ordinal h) del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos,

(...) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

(...)

h). derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior

En relación con su contenido, este Tribunal tiene afirmado que el derecho a los medios impugnatorios es un derecho de configuración legal, mediante el cual se posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional superior. En la STC 1231-2002-HC/TC, el Tribunal recordó que éste constituye

(...) un elemento necesario e impostergable del contenido del debido proceso, en la medida en que promueve la revisión, por un superior jerárquico, de los

errores de quienes se encuentran autorizados, en nombre del pueblo soberano, a administrar justicia.

Igualmente, el Tribunal tiene expresado que, en tanto derecho de configuración legal, corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir para que estos sean admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se deba seguir. Su contenido constitucionalmente protegido garantiza que no se establezca y aplique condiciones de acceso que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o impedir irrazonable y desproporcionadamente su ejercicio. Excluida de ese ámbito de protección se encuentra la evaluación judicial practicada en torno al cumplimiento, o no, de las condiciones o requisitos legalmente previstos, en la medida en que no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del significado del derecho fundamental a los medios impugnatorios y, en particular, en lo relacionado con la extensión de su ámbito de protección. El Tribunal, en ese sentido, ha dejado sentado que

(...) la apreciación y aplicación de la ley en un caso concreto es competencia del Juez Ordinario; (...) el Juez Constitucional no tiene entre sus competencias el imponerle al Juez una determinada forma de interpretar la ley, pues ello implicaría una inadmisble penetración en un ámbito reservado al Poder Judicial, salvo que para tutelar un derecho fundamental de configuración legal sea necesario interpretar su conformidad con la Constitución (...). (STC 8329-2005-HC/TC, FJ 4)”

### **Legitimación.**

Conforme lo señala la norma procesal están legitimados para interponer medios impugnatorios las partes o terceros legitimados es decir los que integran la relación jurídica procesal, sea el demandante, demandado o terceros. Este constituye un requisito de carácter subjetivo ya que solamente están autorizados a interponerlos aquellos que participan del proceso judicial. “Sólo el que haya sufrido el perjuicio podrá denunciar la afectación al debido

proceso, ésta es la regla básica de legitimación para que el efecto de la contravención sea la sanción de nulidad.”

Fíjense que además del requisito de carácter subjetivo, y como veremos más adelante, resulta además necesario que quien impugne el acto procesal cuente con interés que puede ser material o moral, y precise el agravio que la misma le ha ocasionado. Por ello no bastara con que el impugnante sea parte en el proceso en cualesquiera de sus formas, sino que además debe contar con un interés y señalar el agravio o perjuicio que le origina la resolución judicial materia de impugnación.

Características fundamentales de los recursos.

1. Es un derecho exclusivo de la parte o tercero legitimado agraviados. Resulta inconcebible que el Juez apele de la sentencia que ha emitido.
2. Los recursos atacan exclusivamente resoluciones.
3. En cuanto a su extensión, puede recurrirse total o parcialmente de una resolución.
4. Los recursos se fundamentan en el agravio. La génesis del agravio se produce en el vicio u error. Los errores esencialmente son de dos tipos: Error in iudicando y error in procedendo. El primero atañe al quebrantamiento de las normas sustantivas o materiales; el segundo a las normas procesales o adjetivas.
5. Los efectos del recurso son de extensión limitada; no es factible anular los actos procesales que no se encuentren viciados.

### **Efectos de los medios impugnatorios.**

Respecto de los efectos que origina se ha señalado que: “La interposición de un medios de impugnación produce diversos y variadas consecuencias, a saber: 1) interrumpe la concreción de la res judicata; 2) prorroga los efectos de la litispendencia; 3) en ciertos casos determina la



apertura de la competencia del superior (efecto devolutivo); 4) imposibilita el cumplimiento del fallo (efecto suspensivo), y 5) limita el examen del ad quem en la medida de la fundamentación y del agravio.”

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha precisado en el proceso de amparo seguido por Minera SullidenShahuindo S.A.C. y Compañía de Exploraciones Algamarca S.A. con relación a la garantía constitucional de la doble instancia y por ende a la interposición de medios impugnatorios que: “El derecho a la pluralidad de instancias garantiza que en la dilucidación de una controversia planteada en sede judicial, exista una estructura jurisdiccional que, cuando menos, se encuentre organizada en una doble instancia, y para cuyo acceso se prevean los medios impugnatorios que correspondan.

Este derecho no garantiza, que toda pretensión planteada a través de los medios impugnatorios deba ser amparado u otorgado. Tampoco garantiza un pronunciamiento sobre los extremos planteados en el medio impugnatorio, cuando la instancia judicial superior advierta que en su concesión o en el desarrollo del proceso, se ha producido una causal de nulidad contemplada en la ley (FJ 23-28). “

## **Finalidad**

Este artículo además de señalar la definición de los medios impugnatorios y los sujetos que se encuentran legitimados para plantearlo, precisa la finalidad de los mismos, la cual consiste en que cuando exista un vicio o error en un acto procesal esta sea revisada por un órgano superior a fin de que este pueda corregirlo, para lo cual habrá de expedir una nueva resolución.

Conforme lo señala HINOSTROZA, el fin que se busca alcanzar con los recursos está constituido por la eliminación de los agravios que provocan las resoluciones erradas, arbitrarias y contrarias a derecho, y de esta forma lograr en los órganos de administración de justicia un mantenimiento del orden

jurídico. Por lo que añade que no solamente cumple un fin particular sino también no de interés público o general.

Para GOZAINI con relación a la finalidad de los medios impugnatorios, precisa brevemente que “(...) la impugnación tiende a corregir la falibilidad del juzgador, y con ello, lograr la eficacia del acto jurisdiccional.” En tal sentido como se había precisado, la labor del magistrado es un acto humano, falible de errores que pueden ser objeto de observación y puesta en conocimiento por las partes y terceros y corregido en su caso por el superior, el mismo que también es humano y por tanto también dicha decisión puede ser falible y en tal supuesto podremos recurrir a un ente superior y de allí, qué más podemos esperar?

En sede judicial se ha indicado al respecto que: “La utilización de los medios de impugnación tiene a satisfacer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que es a su vez uno de los principios pilares sobre los que reposa el debido proceso.”

### **Clases de medios impugnatorios.**

Los remedios pueden formularse por quien se considere agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones. La oposición y los demás remedios sólo se interponen en los casos expresamente previstos en este Código y dentro de tercer día de conocido el agravio, salvo disposición legal distinta.

Los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado con una resolución o parte de ella, para que luego de un nuevo examen de ésta, se subsane el vicio o error alegado.

En sede civil nuestra corte en reiterada jurisprudencia ha precisado: “El artículo trescientos cincuenta y seis del Código Procesal Civil clasifica los medios impugnatorios en remedios, que proceden contra actos procesales no contenidos en resoluciones, y los recursos que proceden contra resoluciones judiciales, en ambos tipos de medios impugnatorios rige el principio dispositivo

de la impugnación, en virtud del cual solamente puede conocerse y resolverse una impugnación si es que las partes lo solicitan.”

## **1.- Remedios**

El profesor Juan MONROY señala que *“Los remedios son aquellos a través de los cuales la parte o el tercero legitimado pide se reexamine todo un proceso a través de uno nuevo o, por lo menos, el pedido de reexamen está referido a un acto procesal. El rasgo distintivo está dado porque el remedio está destinado a atacar toda suerte de actos procesales, salvo aquellos que están contenidos en resoluciones.”*

En tal sentido los remedios son aquellos medios impugnatorios encaminados a lograr que se anule o revoque, ya sea en manera parcial o total determinados actos procesales que no se encuentran contenidos en resoluciones. Se interpone ante el mismo Juez que conoció del acto procesal materia de impugnación, a fin de que este proceda a reexaminarlo y en su oportunidad lo modifique, revise o revoque, en su totalidad o en parte de ella.

Así, los remedios pueden ser dirigidos contra el acto de notificación, la actuación de un medio de prueba, una diligencia externa realizada por el secretario, etc. es decir cualquier acto procesal que no se encuentran comprendidos en una resolución.

Estos deben ser puestos de conocimiento es decir interpuesto, dentro de tercer día de conocido el agravio, ante el órgano jurisdiccional donde se produjo el acto procesal que se cuestiona, debiendo asimismo, precisar el agravio, vicio o error que lo motiva

El incumplimiento de alguno de los requisitos de procedencia determinara la declaración de improcedencia del remedio, mediante resolución debidamente motivada por el magistrado.

Al respecto se ha precisado en sede judicial que:“El artículo trescientos cincuenta y seis del Código Procesal Civil clasifica los medios impugnatorios en remedios, que proceden contra actos procesales no contenidos en resoluciones, y los recursos que proceden contra resoluciones judiciales, en

ambos tipos de medios impugnatorios rige el principio dispositivo de la impugnación, en virtud del cual solamente puede conocerse y resolverse una impugnación si es que las partes lo solicitan.”

### **1.1. Clases.**

**a.- Oposición.-** Medio impugnatorio destinado a cuestionar determinados medios probatorios que han sido propuestos por las partes en el proceso, con la finalidad de que estos no sean incorporados al proceso y por ende evitar su correspondiente actuación y eficacia probatoria al momento de emitir la resolución final. La oposición además de constituirse en un remedio a su vez es, una cuestión probatoria. El mismo que será analizado más profundamente en el correspondiente capítulo.

Se puede formular oposición a: 1) la actuación de una declaración de parte; 2) a una exhibición; 3) a una pericia; 4) a una inspección judicial y, 5) a un medio probatorio atípico.

**b.- Tacha.-** Acto procesal destinado a que se invalide o reste eficacia determinado medio de prueba por cuanto existe un defecto o impedimento en el mismo. Esta figura además de constituir un remedio, representa una cuestión probatoria. El mismo que será analizado más profundamente en el correspondiente capítulo.

Así, podemos interponer tacha: a) contra testigos; b) documentos y, c) contra los medios probatorios atípicos.

**c.- Nulidad.-** Implica la inaplicación o aplicación errónea de la norma, lo que da origen a su invalidez de sus efectos siempre que dicha causal se encuentre expresamente señalada por la norma o que el acto no reúna los requisitos necesarios para la obtención de su finalidad.

En tal sentido la nulidad de un acto procesal significa la declaración de su invalidez o ineficacia a consecuencia de determinados vicios o irregularidades que lo afectan, estos pueden originarse de una conducta culposa o dolosa. Conforme señala HINOSTROZA, “la nulidad implica la falta de aplicación o la aplicación errónea de la norma procesal, lo que da lugar a

la invalidez de los efectos del acto procesal, siempre que la causal que amerita tal sanción se encuentre establecida expresamente en el ordenamiento jurídico o que el acto procesal en cuestión no reúna los requisitos necesarios para la obtención de su finalidad.”

La nulidad tiene una doble dimensión pues procede contra actos procesales no contenidos en resoluciones judiciales (remedios) y también contra resoluciones que se encuentren afectadas de vicio o error (recurso).

La nulidad también puede ser absoluta cuando esta no es posible de ser subsanada o convalidada y relativa, cuando por el contrario es objeto de subsanación o convalidación

Para COUTURE la nulidad consiste en el apartamiento del conjunto de formas necesarias establecidas por la ley y se inclina a pensar que el desajuste entre la forma y el contenido aparece en todos los terrenos del orden jurídico. Afirma que su significación se acrecienta, especialmente, en los actos solemnes en los cuales muchas veces la desviación de la formas afecta la validez del acto, con prescindencia de su contenido.

El tema relativo a las nulidades presenta un particular significado, tratándose de una disciplina en la que las formas ocupan un lugar destacado, donde las soluciones se desvían y se hacen específicas, particulares a cada una de las ramas del orden jurídico.

En materia procesal civil las nulidades procesales no son distintas a las de las del Derecho sustantivo, ya que los presupuestos de la nulidad procesal, con relación a su tipificación, son exactamente los mismos en el Derecho Civil; y en tanto que es el magistrado quien que va a declarar sobre la existencia o no de una determinada nulidad, no puede llevar al erróneo criterio de la existencia de un distingo de carácter ontológico.

Al respecto se ha señalado que: “Los vicios relativos al emplazamiento se cuestionan en vía de articulación de nulidad la cual constituye un remedio procesal por cuando procede contra actos de notificación no contenidos en

resoluciones; siendo por ello perfectamente factible que al remedio de nulidad se le apliquen los principios en materia de impugnación”.

## **2.- Recursos**

Para COUTURE *“Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un re-correr, correr de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de impugnación por virtud del cual se re-corre el proceso.”*

Los recursos son los medios impugnatorios destinados a lograr la revisión de una resolución que se encuentra afectada por vicio o error sea esta de forma o de fondo, con la finalidad que sea anulada o revocada total o parcialmente por el propio órgano o por el superior jerárquico que emitió el acto cuestionado.

GOZAINI, al respecto precisa que, *“el reconocimiento del derecho a impugnar la decisión, se viabiliza en la senda de los recursos, que son medios de transferir la queja expresiva de los agravios que son considerados presentes en la resolución cuestionada.”*

Se ha señalado que esta revisión la puede realizar el propio órgano emisor, pero este es un caso excepcional toda vez que siempre es un superior el competente para reformar la resolución del A-quo, en principio, pero sólo en el recurso de reposición es dirigido ante el mismo Juez o colegiado que emitió el acto procesal cuestionado.

Resulta necesario poner a consideración lo señalado por MONROY para quien “Los recursos, a diferencia de los remedios, se utilizan con exclusividad para atacar a los actos procesales contenidos en resoluciones. Se trata de los medios impugnatorios por excelencia, (...) asimismo, con relación a la terminología empleada en el lenguaje jurídico de la palabra recurso ha indicado que; “(...) en el Perú al menos, al palabra recurso se ha envilecido, al punto que se usa para nombrar a cualquier escrito que se presenta en un proceso, perdiéndose su acepción específica. Sin embargo

esta ‘popularidad’ del concepto tiene como origen un error en la traducción de los libros de los autores italianos clásicos, la palabra ‘ricorsi’ significa en italiano escrito y la palabra ‘ricorso’ significa recurso en el exacto sentido del concepto. Lamentablemente una palabra subsumió a la otra, de tal suerte que todo se tradujo como escrito, generando así el uso indebido que hoy observamos.”

Estos pueden ser interpuestos por las partes o terceros legitimados que consideren que esa resolución está plagada de un vicio o nulidad y sobre todo que le cause agravio o perjuicio, configurándose de esta manera el interés (material o moral) para poder ser presentado. Esta situación debe necesariamente ser expresada en el escrito que contiene el recurso, debiendo además adecuar su recurso al acto procesal cuestionado.

Otro de los requisitos es el pago del arancel judicial correspondiente, por lo que en caso de no ser presentado o hacerlo de manera diminuta, será declarado inadmisibile, no pudiendo el Juez rechazarlo de plano por la falta de esta tasa judicial, pues se estaría afectando el debido proceso.

## **2.1 Clases**

Conforme lo señala el maestro, los recursos pueden ser clasificados en propios en impropios, siendo que los primeros cuando estos son resueltos por el órgano jurisdiccional superior al que emitió la resolución impugnada e impropio a aquellos, que contrariamente al sistema en que se determina que es un superior el que debe resolver lo decidido por un inferior, son resueltos por el propio magistrado que expedido el acto impugnado.

Igualmente nos señala que los recursos propios, por el efectos que estos producen se clasifican en positivos y negativos, siendo que los primeros aquellos por el que, el Juez se encuentra facultado a declarar la ineficacia del contenido del acto procesal impugnado y además declara el derecho que corresponde, realizando la sustitución del aquel declarado ineficaz. Y los

segundos sólo facultan al magistrado a dejar sin efecto el contenido de la resolución impugnada.

Conforme a nuestra norma procesal tenemos los siguientes recursos:

- a.- Reposición, artículo 362 ° y siguiente;
- b.- Aclaración y corrección, artículo 406 y siguientes;
- c.- Apelación, artículo 364 ° y siguiente;
- d.- Casación, artículo 384 y siguientes;
- e.- Queja, artículo 401 ° y siguiente.

Junto a estos recursos, el legislador ha incluido la CONSULTA en el artículo 407° y siguientes de la norma procesal civil, más, debe precisarse que este no constituye un medio impugnatorio, toda vez que no la ejercen las partes o terceros legitimados, sino que constituye un medio de control jerárquico regulado por la ley.

#### **Artículo 357.- Requisitos de admisibilidad de los medios impugnatorios.**

Los medios impugnatorios se interponen ante el órgano jurisdiccional que cometió el vicio o error, salvo disposición en contrario. También se atenderá a la formalidad y plazos previstos en este Código para cada uno.

El recurso debe ser planteado ante el magistrado léase órgano jurisdiccional, que expidió la resolución objeto de cuestionamiento por uno de los sujetos procesales, el cual lo remitirá ante el superior jerárquico (con excepción del de reposición que es resuelto por el mismo). Al respecto se ha precisado que: “La admisibilidad apunta a los aspectos formales reiterantes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercitarse la impugnación, que en el caso del recurso de apelación se ubican en los aspectos de lugar, tiempo y forma, esto es que el recurso impugnatorio se interpone ante el órgano jurisdiccional que pronuncio el acto impugnado, en un plazo determinado, expresando agravios y adjuntando el recibo de pago de la tasa correspondiente.”



En tal sentido, los requisitos de admisibilidad de los medios impugnatorios son apreciados primigeniamente por el Juez en base a los propuestos por la norma procesal y en su comentario ha de conceder, dependiendo de las circunstancias, un plazo a fin de que subsane la omisión advertida y logre su finalidad, garantizando de esta manera la pluralidad de instancia.

Del mismo modo cuando nos referimos al recurso de queja este es formulado directamente ante el órgano judicial que lo resolverá.

En tal sentido, en sede judicial se ha precisado que: “La interposición de un medio impugnatorio se efectuará cumpliendo las formalidades y plazos previstos por la ley para cada uno; lo que significa también que tratándose del requisito del plazo, la presentación del medio impugnatorio o su subsanación por alguna omisión o defecto debe efectuarse dentro del mismo plazo establecido por la Ley; toda vez que tanto derecho tiene la parte vencida de impugnar la resolución que le causa agravio como la parte vencedora de procurar su consentimiento cuando no se han satisfecho los requisitos de Ley”.

Del mismo modo se ha señalado que no solamente el A quo está facultado a la verificación de los requisitos sino también que el superior pueda nuevamente verificar el cumplimiento de los mismos, por ello manifiesta que: “Toda instancia revisora de una resolución, debe analizar en primer lugar si el recurso correspondiente ha sido interpuesto en el plazo que establece el ordenamiento procesal o fuera de él y si ha sido concedido válidamente o no; en el caso presente la Sala de Casación al dictar la resolución calificatoria del recurso, ha declarado procedente tal medio impugnatorio por contravención del debido proceso, alegándose la extemporaneidad con el que ha sido interpuesto el recurso de apelación; en efecto la Sala Superior ha dejado de determinar la validez o no del concesorio de apelación, cuestionado por la parte actora, por lo que el recurso de casación planteado debe declararse fundado, por ser evidente la violación del debido proceso”.

Debe tenerse en cuenta que estos requisitos también pueden ser revisados por el órgano que conoce el medio impugnatorio, en tal sentido se precisa que: “El Superior también puede declarar inadmisible o improcedente (...), si advierte que no se han cumplido los requisitos para su concesión, en este último caso, declarará nulo el concesorio. [...] Que, en consecuencia, la facultad de las instancias que tramitan los medios impugnatorios, para evaluar las condiciones de admisibilidad y procedencia que estos deben reunir, es propia del procedimiento y su ejercicio no constituye infracción alguna a la Ley Procesal.”

### **Artículo 358.- Requisitos de procedencia de los medios impugnatorios.**

El impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en que lo interpone, precisando el agravio y el vicio o error que lo motiva. El impugnante debe adecuar el medio que utiliza al acto procesal que impugna.

Los medios impugnatorios como todo acto procesal tienen determinados requisitos que debe cumplir para su admisibilidad y procedencia, esa es la facultad que se le concede al Juez quien verificará la legitimidad e interés del impugnante, que se haya realizado dentro del plazo legal correspondiente a la vía procesal en la que se tramita el proceso, de la fundamentación jurídica y en su caso del pago del arancel correspondiente así como la adecuación al acto procesal impugnado.

Igualmente nuestro Tribunal Constitucional ha precisado que: “El derecho a los medios impugnatorios es un derecho de configuración legal y corresponde al legislador crearlos y establecer sus requisitos para que estos sean admitidos. Su contenido garantiza que no se establezca y aplique condiciones de acceso que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o impedir su ejercicio (FJ 2-8).”

En tal sentido constituyen requisitos para la procedencia de los medios impugnatorios:

**a) El agravio.** Es el daño o perjuicio causado por el acto procesal que a criterio del impugnante contienen un error o vicio el mismo que puede ser in

procedendo o in indicando. El resultado desfavorable o consecuencia contraproducente que pudiera tener el acto procesal constituye el principal elemento de alegación que tiene la parte para poder plantear el recurso impugnatorio.

En ese sentido FAIREN GUILLEN señala que: “un importantísimo presupuesto de la incoación del recurso, que lo liga íntimamente con la legitimación, es el de la existencia de un gravamen sufrido por el recurrente a consecuencia de la resolución recaída; este gravamen consiste en la diferencia entre lo solicitado por él y lo declarado en la sentencia y supone la violación de una evidencia de interés jurídico de dicha parte. “ Debemos precisar que no solamente se debe entender lo manifestado por el citado autor, en el sentido que únicamente procede para la sentencia, como lo señala, sino también en relación de cualquier acto procesal (decreto o acto no contenido en resolución) y que además no solamente sea contrario a lo querido por la parte, sino que además no esté acorde con la norma procesal y por ende se encuentra afectado de un vicio o error que debe ser corregido por el propio Juez o por el superior.

Lo trascendental en el agravio es la consecuencia o resultado del acto jurídico procesal y los efectos que este produce con relación a los derechos invocados por las partes y la situación personal que padece el impugnante.

Por ello se señala que: “El agravio es el perjuicio concreto que sufre el sujeto. Difiere del concepto de gravamen, pues, éste pertenece al terreno de lo estrictamente procesal (presupuesto para recurrir); en cambio, se asocia con el interés, que resulta ser una proyección del daño, o interés insatisfecho o menoscabado, dirigido principalmente al ejercicio del derecho de impugnación”.

Los vicios o errores que van a motivar la impugnación pueden ser de dos clases: *in procedendo* o *in iudicando*. El primero está referido a la infracción a las formas, es decir las irregularidades o defectos de los errores en el procedimiento, en las reglas formales. En este supuesto surge ante la inaplicación o aplicación defectuosa de las normas de carácter adjetivas que

afectan al trámite del proceso. El segundo de los mencionados, llamado también de juicio o de tribunal está referido a la infracción de fondo es decir a los defectos o errores en el juzgamiento.

Finalmente en sede judicial se ha reiterado que: “El agravio expresa la inconformidad de quien interpone un medio impugnatorio contra el fallo que le es desfavorable.”

**b) La legitimidad.** si el agravio constituye el primer elemento o requisito de la impugnación, este debe manifestarse o estar dirigido en contra de uno de los sujetos que han intervenido en el proceso, es decir las personas legitimadas por él a participar en el mismo, sea como demandante demandada o tercero legitimado (coadyuvante o excluyente).

Por ello para tener la facultad de impugnar un acto procesal resulta necesario e indispensable que haya intervenido en el proceso en el cual se está cuestionando dicho acto. Son las partes y los terceros, los legitimados para señalar el vicio o error que se haya incurrido en el proceso. El tercero que ha demostrado interés en el proceso podrá interponer medios impugnatorio siempre que quede demostrado su interés y la afectación a un derecho. “El Juez expidió resolución declarando de plano la improcedencia de la demanda; [...] el derecho afectado no es el del demandado sino de la parte demandante, quien por el sentido de lo resuelto deviene en titular del medio impugnatorio que se pretende, y no así el recurrente [demandado], quien no está legitimado para interponerlo, por no sufrir ningún agravio.”

Al respecto COUTURE señala que: “... no son propiamente medios de subsanación a cargo de la parte, sino que son medios de subsanación que funcionan por iniciativa de parte y a cargo del mismo juez o de otro juez superior...” En principio todas las personas que figuran en el proceso como partes principales o secundarias tienen el derecho de recurrir contra las providencias del Juez, peor como la finalidad de la apelación es obtener la corrección de los actos del Juez que perjudican a determinada parte, sólo podrán hacerlo quienes se encuentren perjudicadas por dicha resolución. El

perjuicio puede ser material o moral, no es suficiente un interés teórico en la recta aplicación de la ley.

En tal sentido y con relación a los terceros se ha precisado que: "... Si bien es cierto los terceros legitimados pueden interponer medios impugnatorios, ellos también deben satisfacer los requisitos de admisibilidad y procedencia de los mismos..."

**c) El acto impugnabile.** Está constituido por los hechos o situaciones de carácter procesal que se realizan al interior del proceso y que la norma prevee la posibilidad de ser cuestionado mediante los medios impugnatorios que ella misma establece.

No todos los actos jurídico procesales son susceptibles de ser cuestionados mediante los medios impugnatorios, existe algunas situaciones que la norma prevee en las que no es posible discutirlos, pues debido a su naturaleza o quizá en cumplimiento de algún principio se le restringe o limita esta posibilidad, así tenemos aquellos en los cuales el Código Procesal Civil establece como actos inimpugnables.

Contra los actos procesales del Juez o de los auxiliares jurisdiccionales se interpone para invadirlos los recursos impugnatorios llamados "remedios"; en cambio, la apelación ataca o combate exclusivamente resoluciones judiciales. Y de las resoluciones judiciales sólo procede la apelación contra los autos y sentencias porque contra los decretos se hace valer a través de la reposición.

Para CHIOVENDA "es más bien un elemento que, con el concurso de otro elemento (el término), llegará a ser la declaración de derecho; mediante la sentencia sujeta a tales gravámenes tenemos simplemente una situación jurídica". Es decir para el maestro italiano no se trata de una verdadera sentencia, sin que esto sea impedimento para una ejecución provisional. Es un acto de autoridad de quien la dicta, a cual en algunos casos otro Juez mediante acto posterior la reformula o convalida.

En ese sentido nuestra jurisprudencia dispone que: “No es posible amparar la apelación de una resolución cuando la nulidad deducida fue desestimada, pues el artículo 360° del C.P.C. establece la prohibición de interponer doble recurso contra una misma resolución.” Ejecutoria 12-06-1998 (LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Jurisprudencia actual, T. 2. Lima Pág. 396.)

**d) La formalidad.** los medios impugnatorios como la mayoría de actos procesales requieren de determinados requisitos para su admisibilidad y/o procedencia, es decir, que requiere cumplir una serie de formalidades para lograr los efectos señalados en la norma, así tenemos el plazo de interposición, el pago de la tasa judicial correspondiente, precisar el acto impugnado, la indicación del agravio, la fundamentación jurídica, y otros cuyo incumplimiento determina su rechazo sea por el A-quo o el Ad-quem, ya que este último tiene la posibilidad de calificar los requisitos pese a la admisión del órgano de primera instancia. Por ello se dice que: “El juez superior tiene la facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el Juez inferior”.

Con relación a las formalidades que contiene nuestra norma procesal se ha precisado que: “La formalidad de los actos procesales, de acuerdo a la previsión contenida en el Código adjetivo, está dada por la forma cómo dichos actos se exteriorizan o se materializan.”

**e) El plazo.** Requisito de temporalidad en la presentación de los medios impugnatorios, constituye una limitación del derecho de impugnación toda vez que existe legalmente una oportunidad para su interposición, ello dependerá también del tipo de acto impugnado y de la vía procedimental en la cual se desarrolla el proceso, en este último caso las sentencias por ejemplo.

Estos plazos son perentorios y no pueden ser modificados por actos particulares de las partes o del propio juez, por lo que vencido el mismo ya no hay posibilidad de interponerlos originando que dicha resolución quede consentida.

Por ello se establece jurisprudencialmente que: “Para que los actos procesales tengan validez deben realizarse dentro del espacio de tiempo que la ley ha señalado para su ejecución. La extemporaneidad los hace susceptibles de ineficacia.” Exp. N° 2115-94 2da Sala 21-04-95 (LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. (1995): Ejecutorias, T. 2. Lima Pág. 198.)

Este plazo de computa a partir del día siguiente en que fueron notificados con la resolución o el acto procesal que se impugna, salvo de los que se expidan o se den al interior del desarrollo de una audiencia, la misma que deberá plantearse en ese mismo instante, sin el perjuicio que el Juez disponga que con posterioridad cumpla con fundamentarla y pagar el arancel correspondiente dentro del plazo señalado por éste, bajo apercibimiento de dejarse sin efecto el concesorio de apelación.

**f) La Fundamentación jurídica.** Otro de los requisitos formales de los medios impugnatorios está dado por la exigencia que tiene el apelante de precisar el amparo legal del acto procesal cuestionado, realizando un análisis de los hechos y el derecho a fin de que el acto supuestamente viciado pueda ser corregido por el propio juez o por un órgano superior.

HINOSTROZA, al respecto precisa que “Otro presupuesto de la impugnación es su fundamentación. Así, es, no resulta suficiente que se denuncie algún vicio o error (ya sea *in procedendo* o *in iudicando*), sino que es exigible además señalar los fundamentos de hecho y de derecho que permitan llegar a esa conclusión y que justifiquen la declaración de ineficacia o invalidez, o sea, que persuadan al órgano jurisdiccional revisor de la existencia del vicio, de su trascendencia y del agravio ocasionado al impugnante.”

Nuestra jurisprudencia señala al respecto que: “Si bien es cierto el artículo 366° de la norma procesal impone al recurrente la carga de fundamentar su apelación indicando el error de hecho o de derecho en que incurre la apelada, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria, esta obligación no puede interpretarse restrictivamente de tal manera que implique una privación al derecho a la

tutela jurisdiccional efectiva y del derecho a la doble instancia". Cas. N° 268-96-Lima, Publicado en el diario Oficial "El Peruano", 20-04-1998, Pág. 728.

Asimismo, como lo ha precisado el Tribunal Constitucional, la "(...) fundamentación jurídica; (...) no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; (...)”

**g) Adecuación del recurso.** Ello significa que el impugnante deberá utilizar el medio impugnatorio previsto por la norma procesal sea reposición, apelación, casación o queja, teniendo en cuenta el acto o resolución que impugna. Así frente a un auto final no será posible interponer casación, o ante una indebida notificación la apelación del mismo. Ese yerro en la utilización del medio impugnatorio conlleva a la pérdida del derecho y a la posibilidad de cuestionar el acto impugnado. Así, lo señala la última parte del artículo 358° del Código Procesal Civil

En ese sentido se ha señalado que: “Las partes no pueden sustituir los medios impugnatorios que la Ley franquea por remedios o, recursos de nulidad. Contra el auto de pago, no procede nulidad sino apelación, es decir que la parte no adecuó el medio empleado al acto procesal que impugna máxime si el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, conforme lo preveé el artículo 383 del Código Procesal Civil”. Exp N° 118-01 4ta Sala Civil de Lima, 14-03-02 (LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Jurisprudencia actual, T. 6. Lima Pág. 513.

**h) Pago de arancel judicial.** Otro de los requisitos para la presentación de los medios impugnatorios está constituido por el pago del arancel judicial conforme se ha establecido en la Resolución Administrativa N° 086-2008-CE-PJ que aprueban los aranceles judiciales para el ejercicio 2008.

En ese sentido se ha precisado que: “El acceso a la tutela jurisdiccional como garantía constitucional, así como a la doble instancia está sujeto a los requisitos que la Ley establece, entre ellos para ser concedido el recurso de apelación, el pago de la tasa judicial correspondiente; y, en el caso de no hacerse, esa apelación será rechazada en primera o en segunda instancia...”



Este requisito no será exigible para quienes hayan obtenido previamente auxilio judicial de conformidad con lo señalado en los artículos 178° y siguientes del Código Procesal Civil, así como para los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, Ministerio Público, los órganos constitucionales autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales y las Universidades

Del mismo modo debemos precisar que en los casos de los procesos de alimentos en los que la pretensión del demandante no sea mayor de veinte unidades de referencia procesal, se encuentran totalmente exonerados del pago de arancel por medio impugnatorio y si excede de dicha pretensión, solamente se reduce el pago a un 50% por ciento, así lo señala el artículo octavo de la Resolución Administrativa N° 086-2008-CE-PJ.

#### **Artículo 359.- Incumplimiento de los requisitos.**

El incumplimiento de alguno de los requisitos determina la declaración de inadmisibilidad o de improcedencia del medio impugnatorio, mediante resolución debidamente fundamentada. Esta resolución sólo es recurrible en queja en los casos del Artículo 401.

En el caso que el Juez advierta que el medio impugnatorio propuesto no satisface las exigencias de orden formal éste la declara así mediante auto, indicando en él la omisión u omisiones existentes que han impedido sea admitida a trámite.

Esta resolución tiene un carácter temporal en tanto y en cuanto concede un plazo a fin de que subsane las deficiencias que advierte el magistrado, vencido el mismo y no habiendo cumplido con el mandato contenido se dispone el rechazo del medio impugnatorio y por ende queda firme la resolución.

Este enunciado concuerda con la primera parte del artículo 128° del C.P.C, el mismo que señala que el juez declarará la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de forma o este se cumpla defectuosamente.

En tal sentido constituyen requisitos de forma:

a) Tiempo, los medios impugnatorios se proponen dentro de los plazos que la ley establece.

b) Lugar, deben ser interpuestos ante el mismo órgano jurisdiccional que expidió la resolución materia del medio impugnatorio, salvo la queja que se plantea ante el órgano superior.

c) Forma El requisito de determinadas formalidades que la ley establece teniendo en cuenta la importancia del mismo como por ejemplo el pago del arancel correspondiente.

El auto de rechazo es de carácter definitivo toda vez que existe una abstención del parte del Juez de dar trámite al proceso, y este puede expedirse liminarmente cuando no se cumple uno de los requisitos que contra la norma o no subsana la ausencia de algún requisito formal o es hecho de manera deficiente o inoportuna.

En este caso el Juez advierte que el medio impugnatorio no cumple con un requisito de fondo establecido expresamente por la norma procesal y por ende el recurso no puede prosperar ante el surgimiento de una de las causales previstas en la norma, lo que le impide plantearla nuevamente.

Asimismo, lo señalado, concuerda con la segunda parte del artículo 128° del C.P.C, el mismo que precisa que el juez declara la improcedencia de un acto procesal si la omisión o defecto es de un requisito de fondo.

Así, por ejemplo, para que se admitan los medios impugnatorios se debe tener en cuenta:

a) Adecuación del recurso, en tal sentido el impugnante deberá interponer el medio impugnatorio de acuerdo a la naturaleza del acto procesal que cuestiona. En tal sentido por ejemplo contra una sentencia de primera instancia procede el recurso de apelación y no podríamos plantear sobre la misma uno de oposición por no corresponderle. Del mismo modo no podré interponer sobre el mismo acto procesal dos o más medios impugnatorios.

b) Descripción del agravio, como ya se ha señalado el afectado con el acto procesal debe señalar en que consiste el agravio que le causa el mismo.

c) Fundamentación, en este supuesto, el impugnante deberá señalar y explicar en qué consiste el vicio o error cometido por el órgano jurisdiccional a fin de que sea revisado por el superior.

Es por ello que la ausencia de estos requisitos determina que el magistrado declare la improcedencia del medio impugnatorio. En tal sentido se ha precisado que: “La facultad de las instancias que tramitan los medios impugnatorios, para evaluar las condiciones de admisibilidad y procedencia que estos deben reunir, es propia del procedimiento y su ejercicio no constituye infracción alguna a la Ley Adjetiva.”

Del mismo modo se ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “El Superior también puede declarar inadmisibile o improcedente la apelación, si advierte que no se han cumplido los requisitos para su concesión, en este último caso, declarará nulo el concesorio. [...] Que, en consecuencia, la facultad de las instancias que tramitan los medios impugnatorios, para evaluar las condiciones de admisibilidad y procedencia que estos deben reunir, es propia del procedimiento y su ejercicio no constituye infracción alguna a la Ley Procesal.”

Artículo 360.- Prohibición de doble recurso.-

Está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una misma resolución.

Como ya lo habíamos señalado brevemente, contra un mismo acto procesal no puede plantearse más de un medio impugnatorio. Al respecto HINOSTROZA indica que: “La facultad impugnatoria con que cuentan los sujetos procesales debe ser ejercida correctamente, por lo que no puede estar dirigida a generar dilación en el trámite del proceso: los recursos son instrumentos procesales destinados a lograr la rectificación de las resoluciones erradas, arbitrarias o contrarias a derecho que, por lo mismo, causan agravio, pero no por ello una determinada resolución judicial puede

ser impugnada constantemente, bastando un único recurso y, por ende, un único examen del órgano jurisdiccional revisor para que se cumpla debidamente con el principio de doble instancia.”

De tal modo que se evita que una misma decisión pueda ser objeto de diversos medios impugnatorios no solamente con la finalidad de dilatar el proceso sino de evitar la existencia de resoluciones contradictorias que se podrían dar como consecuencia de la misma. Pero atiende también a que cada acto que se impugna cuenta con determinado medio que permite atacarlo.

En tal sentido, la norma procesal ha establecido diversos medios impugnatorios para los diversos actos procesales que realiza el Juez en el desarrollo del proceso y cada cual tiene un finalidad y un objeto es decir una resolución a la cual puede ser atacada, por lo que se vulnera el principio de celeridad y economía procesal si se permitiera que la parte pueda interponer más de un recurso impugnatorios contra una resolución.

Concordante con esta norma encontramos el artículo 382° del Código Procesal Civil, el cual precisa que el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, sólo en los casos que los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada, por lo que aun cuando se pueda advertir que la resolución es nula y por ende contenga un vicio o error que es objeto de apelación, no se deberá plantear ambos medios impugnatorios, subsumiéndose la nulidad al recurso de apelación.

Al respecto hemos encontrado la siguiente jurisprudencia: “En este caso, el recurrente interpuso recurso de apelación, el que fue declarado inadmisibile de plano por haber acompañado una tasa judicial diminuta con relación a la cuantía y vía procedimental; [...] a pesar de ello el recurrente se adhirió [...] al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; [...] resulta así que el recurrente ha interpuesto dos recursos de apelación contra la sentencia dictada de primera instancia; [...] el artículo trescientos sesenta del Código Procesal Civil prohíbe a una parte interponer dos recursos contra una misma resolución; [...] en consecuencia existe norma procesal que impide

al que interpuso recurso de apelación y se declaró inadmisibile el mismo [...] adherirse posteriormente al recurso de apelación presentado por la otra parte.”

#### **Artículo 361.- Renuncia a recurrir.**

Durante el transcurso del proceso, las partes pueden convenir la renuncia a interponer recurso contra las resoluciones que, pronunciándose sobre el fondo, le ponen fin. Esta renuncia será admisible siempre que el derecho que sustenta la pretensión discutida sea renunciabile y no afecte el orden público, las buenas costumbres o norma imperativa.

Al respecto Juan MONROY precisa que “Es obvio que durante su transcurso las partes tiene que someterse a las normas que regulan su conducta al interior del proceso, es decir a las normas procesales. Sin embargo, cuando las personas establecen una relación procesal o proceso, es decir, contienden pueden convenir que no sea necesario que el proceso pase por dos instancias, sino sólo por una. Es decir, que cuando se expida la sentencia en el proceso, ésta sea suficiente para dar por concluido el proceso. Vale decir que, por convenio, las partes le reconocen eficacia total a la sentencia de primera instancia.

Por cierto, este acuerdo sólo será factible en aquellos casos en que la pretensión se sustenta en un derecho irrenunciabile y que no afecte el orden público, las buenas costumbres o alguna norma imperativa.”

En tal sentido las partes pueden acordar que el proceso pueda concluir solamente en una instancia y por ende que no sea posible que la resolución sea de conocimiento de un órgano superior dada las diversas circunstancias que estos puedan plantearse y que formen parte del acuerdo de la totalidad de sujetos procesales que conforman el proceso.

La norma no precisa el momento en que dicho acuerdo debe ponerse en conocimiento del magistrado, y decimos, debe ponerse en conocimiento del mismo en atención a que conforme precisa la norma esta “será admisible” es decir será admitida en el proceso si no vulnera algunas de las situaciones

previstas en el Código Procesal Civil. En tal sentido cuando debe ser puesta en conocimiento del magistrado antes o después de expedida la sentencia? Asimismo, cual es el plazo que tiene el Juez para aprobar ese acuerdo?

Consideramos, que el acuerdo debe ser puesto en conocimiento del magistrado dentro del plazo que se tiene para impugnar, dependiendo claro está del tipo de proceso, ello con la finalidad de que dicho acuerdo no pueda ni deba entorpecer la decisión a tomar por el magistrado, más aun si este está confiado en que su decisión no será materia de recurso impugnatorio alguno y ha de quedar firme la misma.

Ahora, tomado conocimiento el Juez del citado acuerdo este deberá aprobarlo siempre y cuando el derecho que sustenta la pretensión materia del proceso sea renunciable, igualmente deberá analizar si el acuerdo no está afectando el orden público, las buenas costumbres o norma imperativa, caso contrario lo ha de rechazar, declarando su improcedencia.

Y si el Juez rechaza el acuerdo al que arribaron las partes para evitar impugnar, que es lo que puedo apelar a esta decisión para que la apruebe el superior? Será el órgano de segunda instancia el competente? Y en todo caso, habiendo vencido ya el plazo para apelar en el fondo no se habría cumplido el objeto de dicho acuerdo denegado ya que venció el plazo para poder impugnar y por tanto ha quedado consentida la citada resolución.

### **La ejecución forzada.**

La ejecución forzada se encuentra regulada en el Capítulo V Ejecución forzada del Título V Proceso único de ejecución de la Sección Quinta Procesos contenciosos del artículo 725 al 748 Código Procesal Civil

En principio, hay que señalar que la función más importante de toda sentencia es la obtención de la declaración del derecho sustancial. Ella representa la obligación por parte del Estado a prestar su fuerza pública para

que el vencedor del litigio se coloque en la situación jurídica declarada justa en el fallo.

La ejecución forzada consiste en el ejercicio dentro del proceso, de los poderes del órgano judicial, que comienza con la admisión de la demanda, su tramitación, declaración del derecho, y termina con la fase ejecutiva cuya meta es la materialización del derecho invocado.

De ello se desprende que la finalidad de la ejecución forzada radica en el cumplimiento de la obligación de dar, hacer o no hacer, a que ha sido condenado el vencido mediante el correspondiente fallo jurisdiccional. En caso que el deudor no cumpla con la prestación debida o no ejecute la obligación voluntariamente. El estado lo hará por medio de su poder coercitivo.

En las sentencias declarativas y constitutivas no es posible la ejecución forzada, en cambio, en las sentencias de condena como en el caso de ejecución de obligación de dar suma de dinero, si es susceptible de presentarse la ejecución forzada. En efecto, de no satisfacer voluntariamente el vencido el interés del acreedor, podrá solicitar la intervención estatal, siempre dentro del proceso de que se trate para que le procure, a costa del deudor, la entera y plena satisfacción de su pretensión. (HINOSTROZA MÍNGUEZ, A. 2011).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 725 de la norma adjetiva civil, la ejecución forzada de los bienes afectados se realiza en las siguientes formas:

1. Remate, y
2. Adjudicación.

Es importante resaltar que un acreedor no ejecutante que tiene afectado el mismo bien que será materia de ejecución forzada, puede intervenir en el proceso antes de su ejecución forzada. Sus derechos dependen de la naturaleza y estado de su crédito. Si su intervención es posterior, solo tiene derecho al remanente, si lo hubiere. Así lo dispone el artículo 726 del Código Procesal Civil.

Sobre el particular el artículo 748 Código Procesal Civil, preceptúa que si concurren varios acreedores sin que ninguno tenga derecho preferente y los bienes del deudor no alcanzan para cubrir todas las obligaciones, el pago se hará a prorrata, una vez pagado el acreedor con derecho preferente. También debe tenerse presente lo dispuesto en el penúltimo y último párrafos del artículo 100 del Código Procesal Civil, conforme a los cuales: A. puede intervenir en un proceso quien pretende se le reconozca derecho preferente respecto de lo obtenido en la ejecución forzada y B. tal intervención se tramitará del acuerdo a lo dispuesto Capítulo V Ejecución forzada del Título V Proceso único de ejecución de la Sección Quinta Procesos contenciosos. No podemos dejar de mencionar que la tercería de derecho preferente puede promoverse en cualquier momento antes que se realice el pago al acreedor, y que admitida la demanda se suspende el pago al acreedor hasta que se decida en definitiva sobre la preferencia, pudiendo el tercerista intervenir en las actuaciones relacionadas con el remate del bien, conforme lo regula el artículo 537 del Código Procesal Civil. (HINOSTROZA MINGUEZ A. 2016)

Y por último el artículo 727 del Código Procesal Civil, señala que la ejecución forzada concluye cuando se hace pago íntegro al ejecutante con el producto del remate o con la adjudicación, o si antes el ejecutado paga íntegramente la obligación e intereses exigidos y las costas y costos del proceso.

El mandato ejecutivo.

El proceso se debe dar a quien tiene un derecho sobre todo aquello y precisamente aquello donde él tiene derecho a conseguir.

Donde dentro de la tutela ejecutiva, se tiene el proceso de obligación de dar suma de dinero, en la cual constituye la actuación práctica de un principio de responsabilidad patrimonial, el ejecutante tiene en mente la actividad del órgano jurisdiccional hecha a la realización forzada de los bienes del deudor que le permita a éste obtener el dinero con la finalidad de satisfacer el derecho del ejecutante.

Según, (Código Procesal Civil, 1992), donde *“El Juez calificará el título ejecutivo, verificando la concurrencia de los requisitos formales del mismo. De considerarlo procedente, admitirá la demanda dictando mandato ejecutivo*



*debidamente fundamentado, el que contendrá una orden de pago de lo adeudado, incluyendo intereses y gastos demandados, dentro de un día de notificado, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. El mandato ejecutivo es apelable sin efecto suspensivo. La apelación sólo podrá fundarse en la falta de requisitos formales del título. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, se puede demandar la obligación de la primera”.*

El análisis del mandato ejecutivo, el cual no es otra cosa donde el primer acto del órgano jurisdiccional en el proceso de ejecución es recuperar el dinero. El mandato ejecutivo tiene por objeto satisfacer un derecho de crédito dinerario de un prestamista.

De acuerdo, (Código Procesal Civil, 1992), *“El mandato ejecutivo, dispondrá el cumplimiento de la obligación contenida en el título; bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada, con las particularidades señaladas en las disposiciones especiales. En caso de exigencias no patrimoniales el juez debe adecuar el apercibimiento”.*

Entonces, un mandato ejecutivo estando dentro de un proceso de obligación de dar suma de dinero donde contenga una orden de pago de la obligación se dará inicio a la ejecución forzada, en la cual los jueces han procurado corregir esta inconsistencia, incorporando en sus mandatos ejecutivos un plazo. Donde el plazo lo han equiparado al mismo que tiene el ejecutado para formular contradicción, es decir de cinco días.

Según, (ARIANO, 2010), menciona “Nuestro legislador, como hemos ya referido, en una distorsión de la naturaleza jurídica del proceso de obligación de dar suma de dinero, ha confundido entre el embargo ejecutivo y la medida cautelar entre las cuales existen las siguientes diferencias”.

De acuerdo, (CADENAS, 1991), ayuda aclarar “Ambas instituciones engloban en su estructura una afección jurisdiccional de unos determinados bienes a una ejecución”.

Cuando se habla de un embargo ejecutivo y de medida cautelar, por ello si se define al embargo como el acto del proceso de ejecución mediante el cual se identifica e imprime la responsabilidad ejecutiva en un concreto bien del deudor o de tercero responsable.

#### **La contradicción.**

Según, (AROCA, 1996) *“aquel medio de defensa que se ofrece al ejecutado para combatir la ejecución despachada frente a él, y puede tener por fundamento la existencia de vicios o anomalías que afecten a sus presupuestos o a su licitud, o estar basada en la concurrencia de determinados hechos que afectan a la esencia misma de los que constituye su objeto, de modo que su prosecución carezca de sentido”*.

Para ello, se ha mencionado como el título lo que apareja la ejecución, la contradicción o mejor llamada impedimento, estará orientada, precisamente, a reputar.

De acuerdo, (ARIANO, 2010), *“la oposición a la ejecución reviste naturaleza de acción declarativa negativa, es decir de declaración de la ilegitimidad material de la ejecución pendiente, en relación al ejecutado oponente”* agregando luego *“ la sentencia, que se pronuncia sobre la oposición, puede acogerla; y entonces, ella pronunciando positivamente sobre la oposición declara negativamente el derecho de proceder a la ejecución o sea la ilegitimidad de ésta en relación al oponente”*.

### **El proceso y el contradictorio.**

Según, (POSADA, 2003), *“es muy común en las clases de derecho procesal, partir de la idea que, en la sociedad, los hombres tienen un sinnúmero de necesidades que deben ser satisfechas, y que en aras de la satisfacción de las mismas, se requieren de bienes aptos para tal fin, generándose así una relación entre la necesidad del hombre y el bien apto para satisfacerla, la cual será denominada interés”*.

Según este apuro intersubjetivo de beneficios que puede generar violencia y desatar intranquilidad, lo cual pone en peligro la tranquilidad donde una solución violenta del conflicto no implica una solución justa para ambas partes. Donde una sociedad organizada se encarga de dictar las propias normas de conducta para la solución de aquellos conflictos que amenaza la seguridad ciudadana.

Para, (LLOBREGAT, 2009), menciona *“El instrumento formal del que se sirven los órganos judiciales para ejercitar la potestad jurisdiccional y así, juzgado y haciendo ejecutar lo juzgado, cumplimentar la función de resolver*

con arreglo a Derecho los conflictos de esta índole jurídica que se sometan a su conocimiento”.

**B. De la variable dependiente.** La tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado.

### **1.- Conceptualización de la tutela jurisdiccional efectiva**

Se considera a la tutela jurisdiccional como el poder que tiene toda persona, sea esta natural o jurídica, para exigir al Estado que haga efectiva su función jurisdiccional; es decir, permite a todo sujeto de derechos ser parte en un proceso y así causar la actividad jurisdiccional sobre las pretensiones planteadas.

Por su parte el Tribunal Constitucional sostiene que, *“la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no sólo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia”*. (EXP. N° 763-205-PA/TC)

Este derecho constitucional tiene dos planos de acción, siendo factible ubicar a la tutela jurisdiccional efectiva antes y durante el proceso. La tutela jurisdiccional antes del proceso opera como aquél derecho que tiene toda persona de exigir al Estado provea a la sociedad de determinados requisitos materiales y jurídicos, los cuales son indispensables para resolver un proceso judicial en condiciones satisfactorias, tales como: un órgano estatal encargado de la resolución de conflictos y eliminación de incertidumbres con relevancia jurídica, esto de conformidad con la finalidad concreta del proceso; otro elemento es proveer la existencia

de normas procesales que garanticen un tratamiento expeditivo del conflicto llevado a juicio. Por su parte, la tutela jurisdiccional durante el proceso engloba un catálogo de derechos esenciales que deben ser provistos por el Estado a toda persona que se constituya como parte en un proceso judicial.

Siguiendo la línea establecida por el Tribunal Constitucional, la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a garantizar el acceso a la justicia, su ámbito de aplicación es mucho más amplio, pues garantiza obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones que se deducen en un proceso.

Para la reconocida procesalista Marianella Ledesma, *“la tutela jurisdiccional efectiva garantiza que bajo ningún supuesto se produzca denegación de justicia; agregando que esta, no resulta vulnerada por rechazar una demanda ante la no subsanación de ciertas omisiones; asimismo, no implica un derecho absoluto, ya que requiere del cumplimiento de determinados requisitos a través de las vías procesales establecidas por ley; sin embargo, éste derecho solo podría ser limitado en virtud de la concurrencia de otro derecho o libertad constitucionalmente protegido, que suponga incompatibilidad con el mismo”*. (LEDESMA NARVAEZ, M.)

Similar posición adopta el Tribunal Constitucional, al considerar que el derecho de todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como manifestación de la tutela judicial efectiva no implica la obligación de estimar favorablemente toda pretensión formulada, sino que simplemente sienta la obligación de acogerla y brindarle una sensata como razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad. No es que el resultado favorable esté asegurado con solo tentarse un petitorio a través de la demanda, sino que tan sólo otorga la expectativa de que el órgano encargado de la administración de justicia pueda hacer del mismo un elemento de análisis con miras a la expedición de un pronunciamiento cualquiera que sea su resultado.

En conclusión, la tutela jurisdiccional efectiva no significa la obligación del órgano jurisdiccional de admitir a trámite toda demanda, ni que deba declararse fundada.

## 2.- Contenido de la tutela jurisdiccional efectiva

Para la doctrina española la tutela judicial efectiva, plasmada en su Norma Fundamental, *“tiene un contenido complejo, que incluye los siguientes aspectos: el derecho de acceso a los Tribunales, el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y el derecho al recurso legalmente previsto”*. (PICO I JUNOY, J.)

Por su parte, este derecho constitucional ha sido también recogido en nuestro Código Procesal Constitucional, al respecto su artículo 4° establece que:

*“Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”*.

Del tenor de éste artículo se colige que el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva comprende: el derecho al acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho a una resolución fundada en derecho, y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.

Corresponde avocarnos al tratamiento de los elementos que constituyen el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho de acceso a la justicia se configura como aquel poder que consiste en promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; éste componente se concreta en el derecho a ser parte en un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que converja en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas al interior de un proceso.

Otro elemento de la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, que a su vez contempla el principio de motivación de las resoluciones judiciales; tal principio está contemplado en el inciso 5) del artículo 139 de nuestra Constitución. Al respecto Juan Monroy Gálvez señala que, *“no hace más de dos siglos, los jueces no estaban obligados a fundamentar sus decisiones, es decir, ejercían su función y resolvían a partir de su intuición de lo justo. Sin embargo, una de las conquistas más relevantes, no solo procesales sino del constitucionalismo moderno, ha consistido en la exigencia al juez en el sentido de que debe fundamentar todas y cada una de sus decisiones, a excepción de aquellas, que por su propia naturaleza, son simplemente impulsivas del tránsito procesal”*. (MONROY GALVEZ, J).

Cuando un juez emite un pronunciamiento es necesario que las partes conozcan el proceso mental que lo ha llevado a establecer las conclusiones que contiene dicha resolución; es por eso que, toda resolución debe tener una estructura racional y detallada. El Tribunal Constitucional, destaca que: *“el derecho a una sentencia debidamente justificada no se agota en la mera enunciación de la norma aplicable a un caso, sino que importa de manera gravitante la acreditación de los hechos y la forma de crear convicción en determinado sentido del Juzgador”*. (EXP. N° 4226-2004-A/A.).

La falta de motivación deja abierta la posibilidad de potenciales arbitrariedades por parte de los jueces. El derecho de motivación permite un ejercicio adecuado del derecho de defensa e impugnación, ya que una motivación adecuada al mostrar de manera detallada las razones que han llevado al juzgador a fallar en un determinado sentido, permite que la parte desfavorecida pueda conocer en qué momento del razonamiento del juez se encuentra la discrepancia con lo señalado por ella y así facilitar la impugnación de dicha resolución haciendo énfasis en el elemento discordante.

Es importante la opinión de Joan Pico i Junoy, quien refiere que *“a pesar de que la sentencia debe motivarse en derecho, ello no excluye que pueda ser jurídicamente errónea; sin embargo el derecho a la tutela judicial efectiva no ampara el acierto de las resoluciones judiciales, de modo que la selección o interpretación de la norma aplicable corresponde en exclusiva*

*a los órganos judiciales, salvo que la resolución sea manifiestamente infundada o arbitraria, en cuyo caso no podría considerarse como expresión del ejercicio de la justicia, sino simple apariencia de la misma". (PICO I JUNOY, J.).*

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada es una manifestación de la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución. Si bien la citada norma no hace referencia expresa a la efectividad de las resoluciones judiciales, dicha cualidad se desprende de su interpretación, pues busca garantizar que lo decidido por la autoridad jurisdiccional tenga un alcance práctico y se cumpla de manera que no se convierta en una simple declaración de intenciones.

También, la tutela jurisdiccional efectiva en tanto derecho constitucional de naturaleza procesal, se manifiesta y materializa en un proceso a través del derecho de acción y de contradicción.

Mucho antes de que la humanidad contara con una noción de derecho, ésta debió contar imprescindiblemente con un mecanismo de solución de conflictos que permitiese no recurrir a la acción directa que, tenía como instrumento exclusivo el uso de la fuerza y que a su vez prescindía de todo método razonable para solucionar un conflicto de intereses; es así que se germinó la necesidad de recurrir a un tercero. Pues bien, *“el acto de recurrir a este tercero en busca de una solución a un conflicto, es la génesis de lo que siglos después va a denominarse derecho de acción”*. (MONROY GALVEZ, J.).

*“La acción tiene raíces en el derecho romano, de donde nos viene aquello que la define como la res in indicio deducta, es decir, la cosa que en el juicio se pide. Ésta coincidencia entre el objeto pretendido y el acto de solicitar ante la justicia, llevó a que se identificaran los conceptos”, (GONZAINI, O.)* de modo tal que quien tenía acción tenía derecho.

Ésta posición adoptada por el derecho romano fue ratificada en 1856 por Bernard Windscheid; como contrapartida a dicha perspectiva surge la teoría de TeodorMuther, quien fue el primero en concebir al derecho de acción como uno independiente del derecho subjetivo material, dirigido al

Estado con la finalidad de que éste le conceda tutela jurídica; es decir, para Muther el derecho de acción es concreto, público e independiente del derecho subjetivo, pero condicionado a la existencia del mismo.

Para Oscar von Bülow el derecho de acción no relaciona a las partes sino sólo a una de ellas (*demandante*) con el Estado, afirmando así el carácter público y abstracto del mismo; en su opinión, antes de iniciarse un proceso no hay acción, éste sólo existe cuando se interpone la demanda.

En la concepción de Köhler, sobre el derecho de acción se confirma su carácter subjetivo y abstracto, conceptualizándolo como uno inmanente a la personalidad humana, que permite solicitar tutela jurídica; por otro lado, rechaza la identificación que se venía haciendo entre el derecho subjetivo material que se discute y el derecho de acción.

Siguiendo la línea trazada por Muther, Adolfo Wach considera que la acción tiene una orientación bidireccional, en tanto es dirigida por su titular hacia el Estado y al sujeto pasivo de la relación procesal (*demandado*), a efectos de que se le conceda tutela jurídica y con el fin de que le dé cumplimiento o satisfaga su derecho, respectivamente. Para éste jurista alemán, el derecho de acción es de carácter concreto, es decir, concedido a quien tiene un derecho que debe ser protegido.

Con Chiovenda, surge un concepto diferente. Para el maestro italiano la acción es el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la ley que permite actuar la voluntad legal establecida contra el adversario, atribuyéndole un carácter público o privado, según la norma que deba actuarse, siendo además potestativo, dado que tiende a la producción de un efecto jurídico a favor de un sujeto (*demandante*) y con cargo a otro (*demandado*) sin que este pueda hacer algo para evitarlo, y además con la intervención de un tercero (*juez*). Entiéndase a los derechos potestativos como poderes a través de los cuales su titular puede influir sobre situaciones jurídicas mediante una actividad unilateral propia. Una crítica a la definición esbozada por Chiovenda se centra en que si el derecho de acción al estar dirigido al adversario y al ser potestativo, el demandado no puede ni debe hacer nada contra él, por lo que no podría ejercer su derecho de defensa; “sí,



*cuando Chiovenda se refiere a la condición para la actuación de la ley, le está dando al derecho de acción un carácter concreto, es decir, solo podrá ejercerla aquella persona que tiene razón; por lo que es relativamente fácil discrepar del profesor boloños ahora cuando la calidad de abstracto del derecho de acción se encuentra más o menos asentada en la doctrina".* (MONROY GALVEZ, J.)

Por su parte Calamandrei, prosélito de la doctrina de Chiovenda define a la acción como el derecho común a todos de pedir justicia, concibiéndolo como un derecho constitucional de carácter abstracto.

Con Carnelutti surge la concepción contemporánea del derecho de acción, conceptualizándolo como uno de carácter abstracto, autónomo y subjetivo; no obstante, se mantuvo la polémica en torno a su carácter público o privado, es decir, si su sujeto pasivo era el Estado o el adversario del accionante.

Para el maestro uruguayo Eduardo Couture el derecho de acción es una expresión o subespecie del derecho de petición, al que considera como un derecho genérico, universal, presente en todas las constituciones, es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión, inherente a todo sujeto de derecho, además de ser público, por cuanto en la efectividad del ejercicio de éste derecho está interesada la comunidad.

A manera de síntesis podemos afirmar que el derecho de acción es de naturaleza constitucional, inherente a todo sujeto de derechos por el sólo hecho de serlo, y que lo faculta a exigir al Estado tutela jurisdiccional efectiva para un caso concreto. *"Se habla entonces de un poder jurídico que tiene todo individuo como tal, y en nombre del cual le es posible acudir ante los jueces en demanda de amparo a su pretensión; el hecho de que ésta pretensión sea fundada o infundada no afecta la naturaleza del poder jurídico de accionar, pueden promover sus acciones en justicia aquellos que erróneamente se consideran asistidos de razón".* (REVISTA JURÍDICA DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE VENTANILLA CALLAO).

Son caracteres propios de éste derecho el ser público, subjetivo, abstracto y autónomo. Se dice que es de carácter público, ya que el receptor o el obligado es el Estado, quien soporta el deber de satisfacerlo dado que su ejercicio se traduce en la exigencia de tutela jurisdiccional efectiva para un caso concreto. Es subjetivo, porque al ser un derecho fundamental se encuentra en todo sujeto de derechos por la sola razón de serlo. Su carácter abstracto radica en que no requiere de un derecho material para que lo impulse, es decir se prescinde de la existencia del derecho sustancial, pues basta con que el Estado garantice el acceso a los órganos de justicia. Por otro lado, la autonomía del derecho de acción radica en las teorías explicativas (*autonomía dogmática*) y normas reguladoras sobre su ejercicio (*autonomía normativa*).

La tutela jurisdiccional efectiva se materializa también en un proceso a través del derecho de contradicción, este al igual que el derecho de acción, participa de las mismas características, es decir, es un derecho público, autónomo, subjetivo y abstracto, y por ende de naturaleza constitucional que permite a todo sujeto de derechos emplazado exigir al Estado le preste tutela jurisdiccional.

Aun cuando ambos derechos presentan las mismas características, existe una diferencia que los distingue, la cual radica en la libertad de su ejercicio, mientras que la acción es posible ejercerla casi cuando uno quiera, ésta libertad está ausente cuando se ejerce el derecho de contradicción, pues sólo podrá hacerse efectivo el ejercicio de éste derecho una vez instaurado un proceso.

Otra diferencia entre los derechos de acción y contradicción reside en el interés para obrar, que *“es una condición de la acción que consiste en el estado de necesidad de tutela jurídica en la que se encuentra un sujeto de derechos, cuando no tiene otra alternativa para satisfacer su pretensión material que no sea el ejercicio de su derecho de acción. En tal virtud el interés para obrar (...) debe ser invocado por el demandante, de lo contrario no será posible que posteriormente se expida un pronunciamiento válido sobre el fondo, sin embargo, bien puede carecer éste de aquél. No obstante, es imposible concebir la idea de un demandado sin interés para contradecir,*

*porque éste es consustancial a su calidad de emplazado*". (MONROY GALVEZ, J.)

La importancia del derecho de contradicción se halla en dos aspectos: primero, en la necesidad de que el demandado sea notificado válidamente de todo lo que ocurre en el proceso; segundo, en la necesidad de que el emplazado tenga el derecho de presentar alegatos y medios probatorios que sustenten su posición. Por ende, una vez iniciado el proceso y ejercitado el derecho de contradicción por el demandado genera otro derecho aún más amplio, se trata del derecho de defensa.

Éste derecho que surge como consecuencia del ejercicio del derecho de contradicción no sólo garantiza al demandado poder ser oído, poder probar, poder impugnar, sino a todos los partícipes del proceso, incluyéndose al demandante. *"La vigencia del derecho a la defensa asegura a las partes la posibilidad de sostener argumentalmente sus respectivas pretensiones y rebatir los fundamentos que la parte contraria haya podido formular en apoyo de las suyas"*. (PICO I JUNOY, J.). Es así que se justifica la naturaleza constitucional de éste derecho.

### **3. Paralelo entre la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso**

Culminado el análisis tanto de la tutela jurisdiccional efectiva como del debido proceso, nos corresponde exponer las posiciones de la doctrina y de nuestra jurisprudencia nacional en cuanto a las diferencias que existen entre ambas instituciones jurídicas.

Un sector de la doctrina estima que ambos derechos son equivalentes o idénticos; empero, otros consideran que entre la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso existe una relación de género a especie, siendo el primero (*tutela jurisdiccional efectiva*) la abstracción, mientras que el debido proceso vendría a ser la manifestación concreta del primero, es decir ubican el derecho al debido proceso dentro de la tutela jurisdiccional efectiva. No obstante ello, hay quienes consideran que será la hermenéutica judicial la que determine el alcance de los mencionados derechos.

En la Sentencia Constitucional emitida en el Expediente N° 8123-2005-PHC/TC, nuestro Supremo Tribunal ha establecido lo siguiente: “(...) *la tutela judicial efectiva como marco objetivo y el debido proceso como expresión subjetiva y específica, ambos previstos en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos*”.

Para la doctrina española la tutela jurisdiccional efectiva está contenida en el debido proceso, en cuanto a la jurisprudencia existen dos tendencias: *“la primera que considera al debido proceso como aquella garantía integrada por los elementos del Art. 24.2 C.E., que es uno de los elementos de la tutela judicial efectiva, y la segunda que el concepto de debido proceso como sinónimo de tutela judicial sin indefensión, una forma más de referirse al derecho a la jurisdicción”*. (MONROY GALVEZ, J.). Sin embargo, hay quienes consideran que ambas posiciones adoptadas por la jurisprudencia ibérica no es adecuada, ya que se trata de derechos distintos, con orígenes y ámbitos de aplicación diferenciados; como mencionamos anteriormente, la tutela jurisdiccional efectiva tiene su génesis en la Europa Continental luego de culminada la Segunda Guerra Mundial, mientras que el debido proceso surge del derecho anglosajón con la Carta Magna de 1215; en cuanto a su ámbito de aplicación, la tutela jurisdiccional efectiva opera en los procesos de jurisdicción, por el contrario, el debido proceso es aplicable no sólo al proceso judicial sino a los procedimientos administrativos, arbitrales, militares y particulares.

Finalmente es válido concluir que tanto la tutela jurisdiccional efectiva como el debido proceso son derechos fundamentales, inherentes a la dignidad humana y que representan el valor supremo que justifica la existencia del Estado y sus objetivos, constituyendo el fundamento esencial de todos los

derechos que con calidad de fundamentales habilita el ordenamiento, sin el cual el Estado adolecería de legitimidad y los derechos carecerían de un adecuado soporte direccional.

### 2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES

En el presente trabajo desarrollo los siguientes conceptos:

- **Recurso de apelación.** Es un medio de impugnación a través del cual se busca que un tribunal superior enmiende conforme a Derecho la resolución del inferior.

Dentro del orden jurisdiccional existen diferentes ordenadas de forma jerárquica. Esto significa que la decisión de un órgano jurisdiccional puede ser revisada por uno superior. Cuando un juez o tribunal emite una resolución judicial, es posible que alguna de las partes implicadas no esté de acuerdo con la decisión. En este caso, habitualmente, la parte puede usar la *apelación*, a través de la cual se recurre a un órgano jurisdiccional superior para que revise el auto judicial o la sentencia y, si estima que tiene defectos, la corrija en consecuencia.

- **Proceso Único de Ejecución.** -El proceso único de ejecución tiene como fin que se cumpla con un derecho que ya ha sido reconocido en un título ejecutivo, a diferencia del proceso cognitivo o de conocimiento, en el que se persigue la constitución, declaración o extinción de una relación jurídica.

- **Tutela jurisdiccional efectiva.** El derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva, es uno de los derechos fundamentales y/o constitucionales que tiene todo sujeto de derecho (persona natural, persona jurídica, concebido, patrimonio autónomo, entes no personales, etc., teniendo estos la situación jurídica de demandante o demandado según el caso) al momento de recurrir al órgano jurisdiccional (juez en representación del Estado) a fin de que se le imparta justicia, existiendo garantías mínimas para todos los sujetos de derecho que hagan uso o requieran de la intervención del Estado para la solución de su conflicto de intereses o incertidumbre jurídica; utilizando para ello el proceso como instrumento de tutela del derecho sustancial de los mismos.

- **Concesorio del recurso de apelación.** En caso de que el impugnante no proponga los actuados que deban ser enviados al superior en grado, el superior deberá declarar la nulidad del concesorio de apelación, y devolver el expediente al *A-quo*, para que se requiera al impugnante, proponer los actuados que deban ser enviados al superior en grado, emitiéndose un nuevo concesorio de apelación.

- **Efectos del recurso de apelación.** Interpuesta el recurso de apelación mediante resolución se puede conceder con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo con la calidad de diferida y sin la calidad de diferida.

- **Ejecución Forzada.** Es la actuación del órgano jurisdiccional por mandato de la ley, con el objeto de la actuación coactiva de la sentencia de condena, cuando la parte vencida la ha incumplido con hacerlo voluntariamente.

## **2.4. HIPÓTESIS**

El concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución, tiene incidencia significativa en la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018.

### **2.4.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS**

**SH1.-** El nivel de incidencia del concesorio del recurso de apelación con efecto suspensivo en el Proceso Único de Ejecuciones relativamente alta en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018.

**SH2.-** En el 2018 ha sido muy frecuentes la aplicación del concesorio del recurso de apelación sin efecto suspensivo en el Proceso Único de Ejecuciones relativamente alta en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco.

## **2.5. VARIABLES**

### **2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE**

El concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución.

### **2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE**

Tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado.

## 2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES
<p><b>VARIABLE INDEPENDIENTE</b></p> <p><b>El concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concesorio del recurso de apelación con efecto suspensivo.</li> <li>- Concesorio del recurso de apelación sin efecto suspensivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto que resuelve la contradicción estimándola o rechazándola que pone fin al proceso.</li> <li>- Auto que resuelve la contradicción que pone fin al proceso es de aplicación lo dispuesto en el artículo 376 del CPC.</li> <li>- Sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida.</li> <li>- Sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.</li> </ul>
<p><b>VARIABLE DEPENDIENTE</b></p> <p><b>Tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución firme contenida en un auto.</li> <li>- Auto ordenando llevar adelante la ejecución.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto declarando fundada la contradicción.</li> <li>- Auto declarando infundada la contradicción.</li> <li>- Se agregue el cuaderno cautelar al principal.</li> <li>- Nombramiento de peritos tasadores del bien.</li> </ul>



## **CAPÍTULO III**

### **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

#### **3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN**

La presente investigación ha sido de tipo aplicada, ya que ha tenido como base la descripción en el tiempo sobre los expedientes que se sustanciaron en el Segundo Juzgado Civil del Distrito Judicial de Huánuco, 2018, en la que mediante resolución se ha concedido recurso impugnatorio de apelación contra el auto que declara infundada la contradicción y fundada la demanda, sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida.

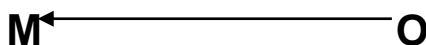
##### **3.1.1. ENFOQUE**

El trabajo de investigación es cuantitativo ya que estructurado desde un enfoque jurídico social, y que aborda una problemática de naturaleza social, en el ámbito del asunto contencioso del proceso único de ejecución, ya que el Órgano Jurisdiccional concede recurso impugnatorio de apelación contra el auto que declara infundada la contradicción y fundada la demanda, sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, contraviniendo el artículo 691 de la norma Adjetiva Civil, a la cual pretendo otorgarle una solución desde la perspectiva jurídica, en la que debe concederse la apelación en la forma que aparece en el artículo antes citado.

##### **3.1.2. ALCANCE O NIVEL**

La investigación tiene el alcance o nivel de descriptiva – explicativa.

##### **3.1.3. DISEÑO**



Dónde: M = Es la muestra

O = Es la Observación

### **3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA**

#### **3.2.1. POBLACIÓN**

La población que se utilizó en la investigación han sido 60 expedientes del Proceso Único de Ejecución, tramitados en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, periodo 2018.

#### **3.2.2. MUESTRA**

Se determinó de manera aleatoria 06 expedientes del Proceso Único de Ejecución, tramitados en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, periodo 2018.

### **3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

<b>Técnicas</b>	<b>Instrumentos</b>	<b>Utilidad</b>
Análisis documental	Matriz de análisis	Recolección de datos
Fichaje	Fichas Bibliográficas de resumen	Marco teórico y bibliografía

### **3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN**

- Se analizaron en forma crítica los contenidos de los expedientes seleccionados del Proceso Único de Ejecución, con las características antes señaladas, así como de los libros, revistas y páginas web vinculadas al tema.
- Se ha procedido con el análisis de las fichas de documentos por estudiarse, la misma que se compulsará a lo largo de todo el proceso de investigación.

## **CAPÍTULO IV**

### **RESULTADOS**

Analizados los instrumentos de recolección de datos, descritos en el proyecto de investigación, se llevó adelante la realización de la aplicación correspondiente para su análisis, ya que el resultado informativo que se obtuvo, es el indicante de las conclusiones a las que se llegó en la investigación.

La finalidad de la presente investigación científica contenida en el informe de tesis, es dar solución a un problema no solo en el marco teórico, sino de manera fáctica teniendo en cuenta que en el tema jurídico relacionado a la incidencia del concesorio del recurso de apelación en el proceso único de ejecución y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, en la que admitida la demanda y formulada contradicción por el ejecutado, y tramitado del proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 690-E del Código Procesal Civil, expedido el auto ordenando llevar adelante la ejecución, el ejecutado interpone recurso impugnatorio de apelación contra el auto que resuelve la contradicción y pone fin al proceso único de ejecución, la misma que es concedida sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 691 de la norma legal antes acotada. Para ello, se aplicó una ficha de observación como instrumento de medición sobre una muestra que consta de seis expedientes sobre la materia, para determinar el fundamento por el cual el Juez del Segundo Juzgado Civil de Huánuco, en el periodo 2018, pese a que la norma antes citada señala que debe concederse el recurso de apelación con efectos suspensivo la concede de un modo distinto a lo solicitado, y como consecuencia de ello se afecta el debido proceso; así mismo explorar y brindar alternativas de solución que hagan posible su atención.

#### **4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS**

Los resultados obtenidos del análisis realizado a seis expedientes sobre proceso único de ejecución, tramitados por ante el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, en el periodo 2018, se determinó en dichos procesos, al

interponer el ejecutado recurso impugnatorio de apelación contra el auto que resuelve la contradicción y pone fin al proceso único de ejecución, es concedida sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 691 del Código Procesal Civil.

**Cuadro Nº 1**

VARIABLE DEPENDIENTE				
EXPEDIENTE	EL AUTO QUE RESUELVE LA CONTRADICCIÓN, PONIENDO FIN AL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN ES APELABLE CON EFECTO SUSPENSIVO.	SE SUSPENDE LOS EFECTOS DEL TRÁMITE EN INSTANCIA INFERIOR.	SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA.	SIN EFECTO SUSPENSIVO Y CON LA CALIDAD DE DIFERIDA.
No. 00062-2018-0-1201-JR-CI-01	SI	NO	SI	NO
No. 00059-2018-0-1201-JR-CI-01	SI	NO	SI	NO
No. 00086-2018-0-1201-JR-CI-01	SI	NO	SI	NO
No. 00002-2018-0-1201-JR-CI-01	SI	NO	SI	NO
No. 00020-2018-0-1201-JR-CI-01	SI	NO	SI	NO
No. 00077-2018-0-1201-JR-CI-01	SI	NO	SI	NO

Fuente: Matriz de Análisis de Expedientes sobre Proceso Único de Ejecución.

Elaborado: Tesista.

En el primer cuadro se advierte expedientes tramitados en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, se advierte en los procesos único de ejecución, en caso so no se formule contradicción al mandato de ejecución, el Juez expedirá resolución sin más trámite, ordenando llevar adelante la ejecución, en la que el auto que resuelve la contradicción, poniendo fin al proceso único de ejecución es apelable con efecto suspensivo,

suspendiéndose los efectos del trámite en instancia inferior. Asimismo el recurso de apelación contra el auto definitivo debe interponerse en el plazo de tres días, la misma que podría concederse sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida o en su defecto sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida.

**Cuadro Nº 2**

VARIABLE DEPENDIENTE				
EXPEDIENTE	AUTO DECLARANDO FUNDADA LA CONTRADICCIÓN.	AUTO DECLARANDO INFUNDADA LA CONTRADICCIÓN.	SE AGREGUE EL CUADERNO CAUTELAR AL PRINCIPAL.	NOMBRAMIENTO DE PERITOS TASADORES DEL BIEN.
No. 00062- 2018-0-1201-JR- CI-01	NO	SI	SI	SI
No. 00059- 2018-0-1201-JR- CI-01	NO	SI	SI	SI
No. 00086- 2018-0-1201-JR- CI-01	NO	SI	SI	SI
No. 00002- 2018-0-1201-JR- CI-01	NO	SI	SI	SI
No. 00020- 2018-0-1201-JR- CI-01	NO	SI	SI	SI
No. 00077- 2018-0-1201-JR- CI-01	NO	SI	SI	SI

Fuente: Matriz de Análisis de Expedientes sobre Proceso Único de Ejecución.

Elaborado: Tesista.

En el segundo cuadro se advierte expedientes tramitados en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, en las que se tiene que la Juzgadora de dicho Órgano Jurisdiccional, emite resolución firme contenida en un auto, sea declarando fundada la contradicción o infundada la contradicción al mandato ejecutivo, asimismo ordena el auto llevar adelante, disponiendo se agregue el cuaderno de medida cautelar al cuaderno principal, y ordenando mediante auto llevarse la ejecución forzada disponiendo el nombramiento de dos peritos tasadores.

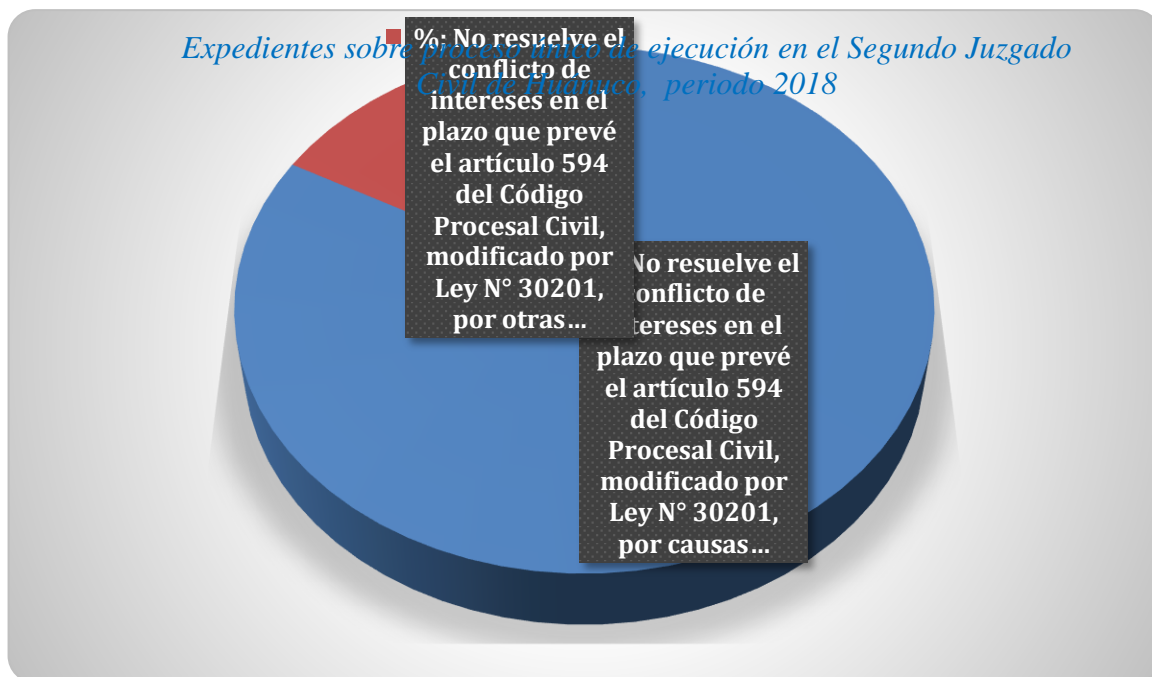
En el cuadro a continuación se determina el total de expedientes sobre proceso único de ejecución del Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, se advierte que las partes en mayor volumen en la que interpuesta recurso impugnatorio de apelación por el ejecutado contra la resolución que declara fundada la demanda e infundada la contradicción al mandato ejecutivo, es concedida sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida. Asimismo se tiene en un menor volumen interpuesto recurso impugnatorio de apelación por el ejecutado contra la resolución que declara fundada la demanda e infundada la contradicción al mandato ejecutivo, es concedida con efecto suspensivo.

**Cuadro Nº 3**

<i>Expedientes sobre proceso único de ejecución del Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018.</i>	<i>Fi</i>	<i>%</i>
<i>En la que interpuesta apelación contra la resolución que declara fundada la demanda e infundada la contradicción al mandato ejecutivo, es concedida sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida</i>	<i>05</i>	<i>83 %</i>
<i>En la que interpuesta apelación contra la resolución que declara fundada la demanda e infundada la contradicción al mandato ejecutivo, es concedida con efecto suspensivo.</i>	<i>01</i>	<i>17 %</i>
<b><i>TOTAL</i></b>	<b><i>06</i></b>	<b><i>100 %</i></b>

Fuente: Matriz de Análisis de Expedientes sobre proceso único de ejecución.

Elaborado: Tesista



Fuente: Matriz de Análisis de Expedientes sobre proceso único de ejecución.

Elaborado: Tesista

**Gráfico N° 1**

### **Análisis e interpretación**

Habiendo hecho un análisis a la muestra de la investigación, que consta de 06 expedientes en materia civil sobre el asunto contencioso de proceso único de ejecución, se advierte de lo aplicado que en el 83 % de los expedientes, el Juzgador ha concedido recurso impugnatorio de apelación contra el auto definitivo que declara fundada la demanda e infundada la contradicción al mandato de ejecución sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida.

Ahora bien, el 17% de expedientes en materia civil, sobre el asunto de proceso único de ejecución, el recurso de apelación contra el auto final que declara fundada la demandada e infundada la contradicción al mandato ejecutivo ha sido concedido con efecto suspensivo.

## **Conclusión.**

Como resultado podemos afirmar que en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, se evidencia un mayor volumen de porcentaje, en la que interpuesta recurso impugnatorio de apelación por el ejecutado contra la resolución que declara fundada la demanda e infundada la contracción al mandato ejecutivo, es concedida sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, por los siguientes fundamentos que desglosaremos a continuación:

- Porque los operadores del Órgano Jurisdiccional competente para conocer el asunto de proceso único de ejecución, al calificar el recurso de apelación contra la resolución que declara fundada la demanda e infundada la contradicción al mandato ejecutivo, no lo califica atendiendo a lo dispuesto en el artículo 691 del Código Procesal Civil.
- Porque la Juez del Segundo Juzgado Civil de Huánuco, no advierte que se trata de una resolución final que pone fin al proceso, con las mismas características de una sentencia cuya concesión debe ser con efecto suspensivo.
- Porque el abogado defensor del ejecutado al concederse con un efecto distinto a lo solicitado, es decir con efecto suspensivo, no lo cuestiona a través del recurso de queja ante el superior en grado.

Es claro que en nuestro ordenamiento jurídico el asunto contencioso de proceso único de ejecución, una vez interpuesta el recurso de apelación contra la resolución final contenida en un auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 691 del Código Procesal Civil, se concede con efecto suspensivo.

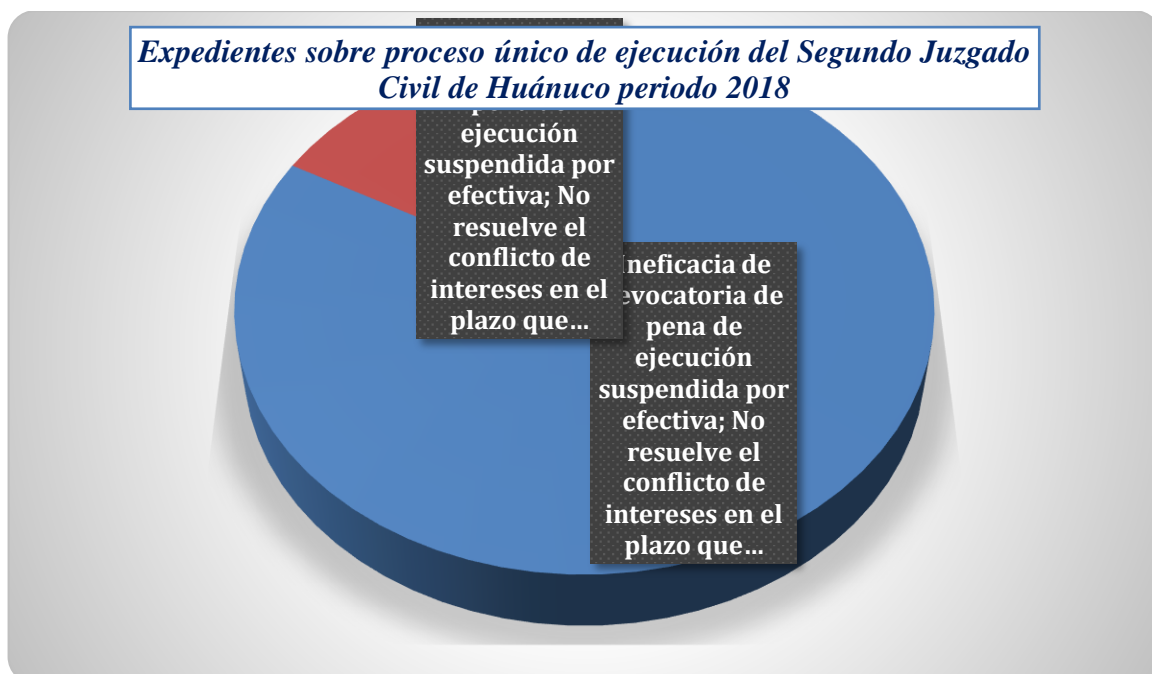


**Cuadro N° 4**

<i>Expedientes sobre proceso único de ejecución del Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018.</i>	<i>Fi</i>	<i>%</i>
<i>No obstante haberse concedido recurso impugnatorio de apelación contra la resolución contenida en el auto final, interpuesto se dispone el inicio de la ejecución forzada y la tasación del bien.</i>	05	83 %
<i>Concedido recurso impugnatorio de apelación contra la resolución contenida en el auto final, interpuesto no se dispone el inicio de la ejecución forzada y la tasación del bien.</i>	01	17 %
<b>TOTAL</b>	<b>06</b>	<b>100%</b>

Fuente: Matriz de Análisis de expediente civiles sobre proceso único de ejecución.

Elaborado: Tesista



Fuente: Matriz de Análisis de expedientes civiles sobre proceso único de ejecución.

Elaborado: Tesista

**Gráfico N° 2**

## **Análisis e interpretación**

Habiendo analizado la muestra de la presente investigación, referente a 06 expedientes en materia de civil, en el asunto contencioso de proceso único de ejecución, advirtiéndose de lo aplicado que el 83 % de los expedientes, que no obstante haberse concedido recurso impugnatorio de apelación contra la resolución contenida en el auto final, la Juzgadora mediante resolución dispone el inicio de la ejecución forzada, y el nombramiento de dos peritos ingenieros civiles para la valorización del bien materia de embargo. Y escasamente un 17% en la que concedida el recurso impugnatorio de apelación, contra la resolución final, no se procede con expedir resolución de inicio de ejecución forzada, menor el nombramiento de dos peritos valorizadores del bien.

## **Conclusión.**

De la obtención de todos estos resultados, es posible llegar a una conclusión la cual está dada que el mayor porcentaje de los procesos sobre proceso único de ejecución que pese haberse concedido recurso impugnatorio de apelación contra la resolución contenida en el auto final, la Juzgadora mediante resolución dispone el inicio de la ejecución forzada, y el nombramiento de dos peritos ingenieros civiles para la valorización del bien materia de embargo, con lo que se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado.

Sin embargo no se tuvo en cuenta por parte de la juez que al expedir resolución que dispone el inicio de la ejecución forzada, y el nombramiento de peritos para la valorización del bien materia de embargo, sin tener en cuenta que la resolución impugnada puede declararse nula o revocarse y reformándola declararse infundada la demanda y fundada la contradicción, es por ello, es que con la presente investigación se propone soluciones, a fin de no vulnerar la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado.

Por lo tanto podemos afirmar que el concesorio del recurso de apelación en el proceso único de ejecución, no tiene incidencia significativa

porque vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado, al haberse expedido resolución disponiendo el inicio de la ejecución forzada y el nombramiento de peritos, pese a que la resolución que contiene el auto final ha sido materia de recurso impugnatorio de apelación, y elevada al superior en grado.

#### **4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS**

Con la información recopilada, analizada e interpretada mediante técnicas de análisis, se evidencia que en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, el concesorio del recurso de apelación en el proceso único de ejecución, no tiene incidencia significativa porque vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado, al haberse expedido resolución disponiendo el inicio de la ejecución forzada y el nombramiento de peritos, pese a que la resolución que contiene el auto final ha sido materia de recurso impugnatorio de apelación, y elevada al superior en grado, sin tener en cuenta que la resolución impugnada puede declararse nula o revocarse y reformándola declararse infundada la demanda y fundada la contradicción.

## **CAPÍTULO VI**

### **DISCUSIÓN DE RESULTADOS**

#### **5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.**

De acuerdo a los resultados obtenidos después de analizadas los expedientes en materia civil, sobre el asunto contencioso de proceso único de ejecución, queda demostrado que en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, se ha vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado, al haberse concedido recurso impugnatorio de apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, en una clara y evidente contravención del artículo 691 del Código Procesal Civil, tanto más, que no obstante haberse concedido recurso impugnatorio de apelación contra la resolución contenida en el auto final, la Juzgadora mediante resolución dispone el inicio de la ejecución forzada, y el nombramiento de dos peritos ingenieros civiles para la valorización del bien materia de embargo, por lo tanto con la presente investigación se hará conocer y divulgará la contravención del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado es decir al derecho a que se le haga justicia, a que cuando pretende algo de otra sea atendida por el órgano jurisdiccional competente en observancia del debido proceso.

## **CONCLUSIONES**

En el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, conforme se ha analizado los seis expedientes en materia civil, sobre el asunto contencioso de proceso único de ejecución, se arribó a las siguientes conclusiones:

**1.-**El concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución, tiene incidencia significativa en la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, porque los operadores del Órgano Jurisdiccional antes citado, al calificar el recurso de apelación contra la resolución que declara fundada la demanda e infundada la contradicción al mandato ejecutivo, no tienen en cuenta lo dispuesto en el artículo 691 del Código Procesal Civil.

**2.-**El nivel de incidencia delconcesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecuciones relativamente altaen el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, debido a que la Juez no tiene en cuenta que la resolución contenida en el auto definitivo pone fin al proceso, y por ende su concesoriodebe ser con efecto suspensivo.

**3.-**En el 2018 ha sido muy frecuentes la aplicación delconcesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución, vulnerando de forma concurrente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, ya que el abogado defensor del ejecutado habiéndose concedido el recurso de apelación con un efecto distinto a lo solicitado, es decir sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, no lo cuestiona a través del recurso de queja ante el superior en grado.

.

## RECOMENDACIONES

Al culminar la investigación, luego de estudiar la muestra y comprobar nuestra hipótesis se recomienda lo siguiente:

- 1.- Para una menor incidencia significativa del concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución, en la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, los operadores del Órgano Jurisdiccional antes mencionado, al calificar el recurso de apelación contra la resolución que declara fundada la demanda e infundada la contradicción al mandato ejecutivo, deben tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 691 del Código Procesal Civil.
- 2.- Para contar con un menor nivel del concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, la Juez debe tener en cuenta que la resolución contenida en el auto definitivo pone fin al proceso, y por ende su concesorio debe ser con efecto suspensivo.
- 3.- Para una menor frecuencia de aplicación del concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución, vulnerando de forma concurrente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018, el abogado defensor del ejecutado habiéndose concedido el recurso de apelación con un efecto distinto a lo solicitado, es decir sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, debe interponer recurso de queja ante el superior en grado, dentro del plazo de ley.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AVENDAÑO VALDEZ, J. (1997). *Derechos Reales*. Segunda Edición corregida y aumentada edición. Lima: Luvia por encargo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- CARRIÓN LUGO Jorge. (2008). *“Procesos de Ejecución”*. Editora Jurídica Grijley E.I.R.L. Primera Edición. Lima.
- CASASSA CASANOVA Sergio Natalino (2011). *“El debido proceso de ejecución de obligación de dar suma de dinero: En busca de un proceso justo”*. Informe de Tesis.
- CARNELUTTI, Francesco. (1951) *“Teoría Generale del Diritto”*. Edizione Scientificheltaliane: Roma.
- CHIOVENDA, Giuseppe. *“Principii di diritto processuale civile”*. JOVENE: Napoli.
- CHICHIZOLA, Mario. (1996). *“El debido proceso como garantía constitucional”*. Lima.
- CÓDIGO CIVIL (2017) JURISTA EDITORES E.I.R.L. Lima.
- CÓDIGO PROCESAL CIVIL (2017) JURISTA EDITORES E.I.R.L. Lima.
- CHIOVENDA. (1936). *Instituciones del Derecho Procesal Civil, T. I, .* Madrid: pág 298, .
- FLORES POLO, Pedro. (1980) *Diccionario de términos Jurídicos*, Tomo I A-F Primera Edición. Lima .Cultural Cuzco S.A.
- GACETA JURIDICA (2016) *Código Procesal Civil Comentado*. Editorial El Búho E.I.R.L. Lima-Perú.
- HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. (2011) *Manual de Consulta Rápida del Proceso Civil*. Grijley E.I.R.L. Tercera Edición. Lima.
- HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. (2016). *Comentarios al Código Procesal Civil*. Pacífico Editores SAC. Cuarta Edición. Lima.
- JOSSERAND, L. (1946). *El espíritu de los derechos y su relatividad*. Puebla.
- LEDESMA NARVAEZ, Marianella. (2015). *Comentarios al Código Procesal Civil*. Gaceta Jurídica. Quinta Edición. Lima.

- PALACIO, Lino Enrique. (2010). *Derecho Procesal Civil, T. VIII, N° 1232*. Lima: Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As.
- SENDRA, G. (2015). *Derecho procesal penal*. Navarra: Editorial Thomson Aranzadi.
- MONROY GALVEZ Juan (2013). *"Diccionario procesal Civil"*. Gaceta Jurídica S.A.



# **ANEXOS**

**MATRIZ DE CONSISTENCIA**

**“INCIDENCIA DEL CONCESORIO DEL RECURSO DE APELACION EN EL PROCESO UNICO DE EJECUCION Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DEL EJECUTADO EN EL SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE HUANUCO, 2018”**

PROBLEMAS	OBJETIVO	HIPOTESIS	OPERACIÓN DE VARIABLES			
			VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	INSTRUMENTO
<p><b>PROBLEMA GENERAL</b> ¿Cómo incidirá el concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018?</p> <p><b>PROBLEMA ESPECIFICO</b> <b>PE1</b> ¿Cuál es el nivel de incidencia logrado, del concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018?</p> <p><b>PE2</b> ¿Qué tan frecuentes han sido la aplicación del concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018?</p>	<p><b>OBJETIVO GENERAL</b> Demostrar el grado de incidencia del concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018.</p> <p><b>OBJETIVO ESPECIFICO</b> <b>OE1</b> Determinar el nivel de incidencia del concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018.</p> <p><b>OE2</b> Identificar el nivel de frecuencia del concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018.</p>	<p><b>HIPOTESIS GENERAL</b> El concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución, tiene incidencia significativa en la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018.</p> <p><b>HIPÓTESIS ESPECÍFICO.</b> <b>SH1.-</b> El nivel de incidencia del concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución es relativamente alta en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, 2018.</p> <p><b>SH2.-</b> En el 2018 ha sido muy frecuentes la aplicación del concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución es relativamente alta en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado en el Segundo Juzgado Civil de Huánuco.</p>	<p><b>INDEPENDIENTE</b>  El concesorio del recurso de apelación en el Proceso Único de Ejecución.</p>	<p>Si no se formula contradicción el Juez expedirá un auto sin más trámite, ordenando llevar adelante la ejecución.</p> <p>- Recurso de apelación contra el auto en el plazo de tres días</p>	<p>El auto que resuelve la contradicción, poniendo fin al proceso único de ejecución es apelable con efecto suspensivo.</p> <p>Se suspende los efectos del trámite en instancia inferior.</p> <p>Sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida. Sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.</p>	<p>1. Análisis Documental</p> <p>2. Jurisprudencia</p>
			<p><b>DEPENDIENTE</b>  Tutela jurisdiccional efectiva del ejecutado.</p>	<p>- Resolución firme contenida en un auto.</p> <p>- Auto ordenando llevar adelante la ejecución.</p>	<p>- Auto declarando fundada la contradicción. - Auto declarando infundada la contradicción.</p> <p>- Se agregue el cuaderno cautelar al principal.</p> <p>- Nombramiento de peritos tasadores del bien.</p>	